



Procedimiento concursal Fast Track Parc 2.0 frente al COVID-19 en Perú

Tesis presentada en satisfacción parcial de los requerimientos para obtener el grado de
Magíster en Finanzas y Derecho Corporativo

por:

Joseph David Bazán Huamán

Hammerly Cuyan Zumaeta

Mario Augusto Tejeda Jara

Programa de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo

Lima, 09 de julio de 2021

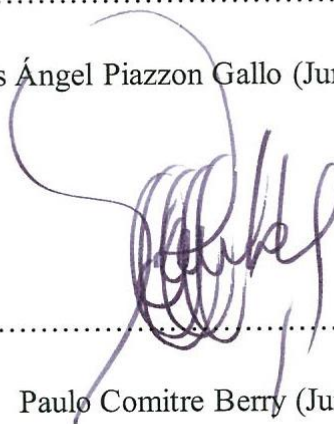
Esta tesis

Procedimiento concursal Fast Track Parc 2.0 frente al COVID-19 en Perú

ha sido aprobada.



.....
Luis Ángel Piazzon Gallo (Jurado)



.....
Paulo Comitre Berry (Jurado)



.....
Francisco Barrón Velis (Asesor)

Universidad ESAN

2021

Agradecimientos

A Dios, a mi esposa y a mi familia por el apoyo incondicional en este proceso.

Hammerly Cuyan Zumaeta

A Dios, a mis padres y a mi esposa por su apoyo constante e incondicional.

Mario Augusto Tejeda Jara

A Dios y a mis padres por su apoyo constante e incondicional.

Joseph David Bazán Huamán

HAMMERLY CUYAN ZUMAETA

Profesional con más de 9 años de experiencia en áreas de Contabilidad, Finanzas y Gestión, contribuyendo al crecimiento institucional a través del diagnóstico y preparación de informes alineados a los intereses estratégicos y sumando valor a través del desarrollo de proyectos de inversión con financiamiento interno y externo. Experiencia en procedimientos de fiscalización por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Es una universidad privada dedica a la formación de profesionales con principios y valores bajo la filosofía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Tesorero General

Julio 2019 - Actualidad

Responsable de dirigir, gestionar y controlar los intereses económicos de la institución de acuerdo a las políticas, planes y programas presupuestados; presentando informes financieros para el manejo administrativo.

Controller

Mayo 2019 - Actualidad

Responsable por la planificación, coordinación, dirección y control de actividades de corto, mediano y largo plazo, ejecutadas en el área de planificación, contraloría y finanzas. Extraer y consolidar informaciones relevantes, de confianza y oportunas, generando informes para auxiliar en la toma de decisiones de los gestores de cada área, así como para la administración de la universidad.

Contador General

Junio 2015 – Abril 2019

Consolidación y elaboración de los Estados Financieros, obligaciones tributarias ante SUNAT, obligaciones formales ante SUNEDU (que vinculen contablemente) Comparecer frente a procesos de fiscalizaciones laborales y tributarios. Velar el cumplimiento de los cambios normativos vinculados al perfil profesional.

Contador de Filial

Enero 2015 – Abril 2015

Elaboración de los estados financieros de la Filial y envío de registros tributarios para pago de impuestos de la filial.

Analista Contable

Diciembre 2013 – Diciembre 2014

Revisión de las notas a los estados financieros presentados por cada sede y filial de la universidad para después consolidarlos.

ASOCIACIÓN SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD DE LA MISIÓN DEL ORIENTE PERUANO

Contador

Enero 2013 – Octubre 2013

Elaboración de los estados financieros, envío de los registros tributarios a la sede central para la declaración de impuestos.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO – DRNOSM

Tesorero Regional

Agosto 2011 – Diciembre 2012

Responsable de las cuentas bancarias, chequeras y fondos fijos de la entidad, con poderes para firmar y autorizar transferencias por las ejecuciones de gasto e inversión.

FORMACIÓN PROFESIONAL

ESAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS

2018 - 2021

Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

2008 - 2012

Contabilidad y Finanzas

MARIO AUGUSTO TEJEDA JARA

Abogado por la Universidad de San Martín de Porres, con más de 12 años de experiencia en asesoría legal financiera, patrimonial y reestructuración. Amplia experiencia en el patrocinio de intereses en procesos arbitrales y judiciales, en material civil, comercial e inversiones. Con altos valores éticos, orientado hacia la obtención de resultados y con alta capacidad para el liderazgo de equipos.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Sub-Gerente Legal Adjunto - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (2018 – Actualidad)

Abogado en el área de Cuentas Especiales del Banco de Crédito del Perú. Enfocado en la planificación y ejecución de estrategias legales eficaces que permitan al Banco la recuperación exitosa de sus acreencias en sede arbitral y/o judicial y/o a través de distintos vehículos de financiamiento tales como fideicomisos, créditos sindicados, créditos estructurados, leasings, etc.

Supervisión y coordinación permanente con los Estudios de abogados encargados de llevar adelante los procesos judiciales y arbitrales donde el Banco actúe como demandado o demandante. Del mismo modo, superviso los procedimientos concursales donde participen clientes del Banco.

Atención de consultas internas de otras áreas del Banco referentes a aspectos legales, absolviéndolas directamente y/o preparando los informes legales necesarios. Absolución de denuncias y reclamos contra el Banco ante la SBS e INDECOPI.

Abogado Asociado – ESTUDIO RODRIGUEZ ANGOBALDO (2017 – Actualidad)

Área Solución de Controversias. Asesor legal de distintas empresas nacionales e internacionales en procesos judiciales y en la elaboración de informes y estrategias para eliminar y/o reducir riesgos civiles de carácter patrimonial. Asesoría legal en Banca y Finanzas para la estructuración de diversos vehículos de financiación y reestructuración de operaciones a mediano y largo plazo.

Abogado Asociado - ESTUDIO ARAMBURÚ CASTAÑEDA BOERO (2014-2017)

Área Prevención de Litigios y Solución de Controversias. El área que dirigí fue distinguida por el Banco de Crédito del Perú durante el año 2016 en el primer lugar del ranking anual de asesoría legal para el área de Cuentas Especiales y en segundo lugar durante el año 2015.

Jefe del Equipo de Recuperaciones para Cuentas Especiales del Banco de Crédito del Perú y Banca Empresa del Banco Financiero del Perú, habiendo obtenido resultados óptimos y sobresalientes en el manejo y supervisión de ambas carteras, posicionando al Estudio Aramburú, Castañeda & Boero dentro de los primeros lugares del ranking elaborado sobre asesoría legal por ambos Bancos.

Prevención de litigios, elaboración de estrategias judiciales para recuperación de cartera crediticia y patrocinio como abogado en distintos procesos comerciales, civiles, constitucionales, administrativos, contenciosos administrativos, concursales y arbitrales sobre contrataciones con el estado y responsabilidad médica.

He participado, en calidad de abogado y apoderado legal de empresas del sector financiero nacional y del sector privado internacional, en distintos procesos judiciales y arbitrales por cuantías superiores a los 30 millones de dólares.

Apoderado Legal (2012 - Actualidad)

Apoderado legal del Banco de Crédito del Perú, Precisión Perú S.A. y de diversas compañías nacionales e internacionales.

Secretario Arbitral (2014-2016)

Experiencia como secretario arbitral en distintos arbitrajes sobre contrataciones del estado.

FORMACIÓN PROFESIONAL

ESAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS	2018 - Actualidad
----------------------------------	-------------------

Maestría en Finanzas y derecho Corporativo

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ	2016
--	------

Estudios de Maestría en Derecho Civil

INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA	2013 - 2015
---------------------------------	-------------

Administrador de Empresas con especialización en Finanzas Corporativas.

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES	2007 - 2012
-------------------------------------	-------------

Abogado Titulado.

JOSEPH DAVID BAZÁN HUAMÁN

Profesional con más de 8 años de experiencia en áreas de Contables, financieras y laborales en instituciones de salud, respondiendo con valores y eficiencia a las exigencias normativas con una visión estratégica del negocio.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ASOC. PASTORAL DE SERVICIOS MEDICO ASISTENCIALES GOOD HOPE DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA.

Clínica Good Hope.

Entidad de salud con más de 70 años en el mercado. Forma parte de instituciones de la Iglesia Adventista del Séptimo día.

Gerente Financiero

Enero 2020 - Actualidad

Liderar el equipo financiero promoviendo la mejora continua en cada una de las áreas involucradas. Garantizando la liquidez de la empresa mediante la mejora de procesos y la actualización y mejora de los convenios con las IAFAS. Logrando mantenernos en el mercado de una manera sólida. Analizando inversiones que traigan beneficio a la institución, firmando convenios con socios estratégicos, sumando bienestar a nuestros pacientes.

Contador General

Febrero 2017 – Diciembre 2019

Responsable de la supervisión de contabilidad de acuerdo a la normativa contable y tributaria vigente. Participando activamente en la elaboración de procedimientos que aseguren el cumplimiento de las normas. Gestión de 10 colaboradores, incentivando su mejora continua y un óptimo clima laboral.

Analista de Nomina

Febrero 2014 - Enero 2017

Responsable de la supervisión de la nómina de 1000 trabajadores, manejando diversos tipos de contratos. Participando activamente en la elaboración de procesos y procedimientos que aseguren el cumplimiento de las normas laborales.

Analista Contable

Enero 2012 - Enero 2014

Responsable de las cuentas por pagar y declaración de libros electrónicos, registro de ventas y registro de compras.

FORMACIÓN PROFESIONAL

ESAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS Maestría en Finanzas y derecho Corporativo	2018 - Actualidad
ESAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS Programa de especialización para ejecutivos. Tributación empresarial	2015 - 2015
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN Título en Contabilidad.	2012 - 2012
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN Bachiller en Contabilidad.	2007 - 2011
OTROS ESTUDIOS Privateacher Perú – Nivel Intermedio	2019-2021

RESUMEN EJECUTIVO

Con la aparición de una nueva variante del virus SARS-COV2 en la ciudad de Wuhan - China, nació una gran amenaza, no sólo para la salud sino también para la economía. La pandemia mundial ocasionada por el Covid-19 generó que muchas empresas y negocios se vieran forzados a cerrar temporalmente mientras estuvo en vigencia la cuarentena total en el Perú. Si bien algunas empresas y negocios pudieron seguir funcionando conforme se fue levantando la cuarentena, no es menos cierto que el impacto ocasionado por la reducción de sus ventas en los meses pasados o por la paralización total de funciones había generado un forado en sus estados financieros que generó un quiebre en la cadena de pagos para con sus trabajadores y proveedores, obligando a asumir costos fijos propios del giro del negocio.

Sin embargo, el gobierno peruano puso a disposición una serie de medidas económicas para mitigar el impacto de la COVID-19. Entre ellas se puede destacar la adopción de medidas, como el subsidio a la planilla y aplazamiento de depósito de CTS, prórroga de la declaración y pago mensual del impuesto general a las ventas y prórroga de hasta cuatro meses en la presentación y pago del impuesto a la renta anual del 2019.

Asimismo, como parte de este paquete de medidas económicas, se distingue la creación del programa Reactiva Perú, el cual dentro de sus disposiciones contempla el otorgamiento de crédito a los empresarios, a un interés bajo debido a la garantía concedida por el gobierno central a los bancos, logrando de esta manera evitar la ruptura para la cadena de pagos.

Además, dentro de estas medidas adoptadas por el gobierno, se creó el PARC para sumar a los dos procedimientos concursales ya regulados. Este procedimiento acelerado de refinanciamiento concursal presenta algunas características que son analizadas en la presente propuesta de tesis, para determinar si cumplió con el objetivo para el cual fue creado, y si tiene visos de mejora. De igual modo se analiza la celeridad del procedimiento, el ámbito de aplicación de este procedimiento concursal, la eficiencia del mismo y su requerimiento de mejora para el procedimiento gracias al empleo de un PARC 2.0.

Resumen elaborado por los autores

ÍNDICE

1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN.....	1
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	3
1.2. OBJETIVOS	5
1.2.1. Objetivo General	5
1.2.2. Objetivos Específicos	5
1.3. JUSTIFICACION Y CONTRIBUCIÓN.....	6
1.4. ALCANCE.....	7
1.5. LIMITACIONES	7
2. CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL.....	8
2.1. Cuestión Previa	8
2.2. Diseño del PARC bajo el Decreto Legislativo No. 1511	10
2.3. Modelos Internacionales de Pre-Pack Concursal	15
2.3.1. Pre-Pack y Pre-Plan Sales en EE.UU	15
2.3.2. Pre-Packaged en el Reino Unido.....	17
2.3.3. Pre-Packs y Fast-Tracks en Sudamérica.....	22
2.4. Propuesta de creación de un Fast Track y Pre-Pack PARC 2.0 en el Perú	27
2.4.1. Antecedente: Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal PARC	27
2.4.2. Propuesta Nuevo Fast Track y Pre-Pack PARC 2.0.....	33
2.5. Información Estadística.....	41
3. CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA	62
4. CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL NUEVO FAST TRACK Y PRE-PACK PARC 2.0	62
4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	62
5. CAPÍTULO IV: ANEXOS	66
5.1. Detalle de Procedimientos Iniciados Del año 2006 al año 2019	66
5.2. Detalle de Histórico de la Junta de Acreedores.....	71
5.3. Detalle de Junta de Acreedores según destino del patrimonio del deudor	75
5.4. Detalle de Créditos reconocidos según destino del patrimonio del deudor – expresado en millones de soles	78
5.5. Detalle de procedimientos concluidos según tipo de solicitante	83
5.6. Detalle de solicitudes al Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal - PARC	84
5.7. FLUJOGRAMA PARC.....	85
6. CAPÍTULO V: BIBLIOGRAFÍAS	86

1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

El sistema de insolvencia en el Perú ha sufrido una serie de cambios buscando cumplir su verdadero objetivo: ser un sistema eficiente y racional, maximizando los activos del deudor para beneficiar al acreedor. A lo largo de la historia del sistema concursal existieron muchos cambios de los cuales a continuación se destacan los más relevantes.

Los principales dispositivos que regularon en sus inicios el sistema de insolvencia en el Perú fueron el código civil y el código de enjuiciamiento civil, ambos regulados en el siglo XVIII. Para el año 1932 se promulga la ley 7566, “Ley Procesal de quiebras”, cuya premisa era liquidar el patrimonio de la empresa deudora y dar por muerta a la empresa que entraba en quiebra sin posibilidad alguna de una reestructuración empresarial.

Es preciso acotar que, bajo esta ley toda empresa que tenía problemas en su cadena de pagos por falta de liquidez estaba condenada a la liquidación, sin la opción de la reestructuración patrimonial, evidenciando que no existía un sistema adecuado capaz de evaluar integralmente las dificultades financieras que atravesaban éstas.

Dentro de este contexto la quiebra «insurge como una institución que persigue dos finalidades jurídicas perfectamente definidas: 1) el pago a todos los acreedores del quebrado (...)» y «2) (...) La sanción o represión penal de la culpa o dolo (fraude) del deudor en sus relaciones con los acreedores» (Pedro Flores Polo – 1989).

Ahora bien, esta concepción que duró aproximadamente seis décadas afectó un sin fin de empresas, ya que se liquidaban empresas cuyo valor de mercado era mayor a las obligaciones que tenían impagas. Años más tarde, en 1992, se promulga el decreto legislativo 26116 “Ley de Reestructuración Empresarial”, la cual adoptaba una serie de medidas que eran distintas a la “Ley de Quiebras”. Las medidas que adoptaba esta “Ley de Reestructuración Empresarial” fueron la desjudicialización parcial del proceso, la asignación de competencias a INDECOPI y el traslado de la toma de decisiones a los acreedores,

otorgando alternativas que eran distintas a la liquidación, dándose así la oportunidad de una reestructuración empresarial.

Es así como para el 26 de enero de 1996 se promulgo el decreto legislativo 845 “Ley de reestructuración patrimonial” el cual dio fuerza a la reestructuración empresarial, pues agregó procedimientos preventivos y redujo solo a dos las alternativas que tenía la junta de acreedores, siendo ellas la reestructuración empresarial o disolución y liquidación, eliminando así la posibilidad de que la empresa se declarara en quiebra por decisión de la junta de acreedores, quedando como un mecanismo judicial residual como consecuencia de la inexistencia total de activos para afrontar el pago de los pasivos pendientes.

Tiempo después, para 1999 se promulga la ley de Fortalecimiento del Sistema de Reestructuración Patrimonial, la cual trae consigo modificaciones en el código penal, incorporando cuatro artículos además de un título denominado “Atentados contra el sistema crediticio”. Luego de estos cambios en el marco legal relacionado a procesos de insolvencia en el Perú, existieron otros que buscaron un ordenamiento jurídico que regule el sistema concursal peruano y sus actores. Más recientemente, para el año 2002 mediante la ley 27809 “Ley General del Sistema Concursal”, se buscó regular la inherente inhabilitación y la rehabilitación del quebrado.

De modo que, todos estos cambios se realizaron en respuesta a los intentos por parte del estado peruano por promover mecanismos de salidas que les permitiesen a las empresas no ser liquidadas o tener una salida ordenada del sector, velando por los intereses del deudor y del acreedor. Como parte de estos intentos del estado peruano en el 2020 se crea el Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal (PARC), este nuevo procedimiento perseguía que sus acreedores puedan aceptar un plan de refinanciación empresarial sin llegar a la insolvencia.

Sin duda alguna, la creación del procedimiento acelerado de refinanciación concursal, responde a la crisis sanitaria mundial ocasionada por la COVID-19, la cual ha obligado al estado peruano a tomar medidas excepcionales no solo en materia sanitaria, sino también medidas en el sector empresarial.

Finalmente, se destaca que, el tema central de esta investigación es el estudio del Procedimiento Fast Track denominado PARC, analizando su eficiencia, la racionalidad de éste y su necesidad de perdurar en el tiempo a través de un PARC 2.0. Entendiendo como eficiencia a “la capacidad de conseguir un efecto determinado” y como racionalidad a la capacidad de ser eficiente a través de todo el proceso.

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A finales del año 2019, con la aparición de una nueva variante del virus SARS-COV2 en la ciudad de Wuhan - China, nació una gran amenaza, no sólo para la salud sino también para la economía. Debido a la rápida propagación del virus por el mundo, los gobiernos ordenaron confinamiento total obligatorio generando una crisis financiera a nivel mundial.

Es de hacer notar que, una empresa entra en una situación de crisis financiera cuando no puede afrontar sus obligaciones frente a terceros. Existen distintas causales por las que una empresa, al entrar en una crisis y trastorno empresarial, no puede asumir las obligaciones regulares de su negocio y afronta la situación de incumplimiento de pago con sus principales acreedores.

De acuerdo con ello, y frente a esta situación de incumplimiento, el derecho concursal surge como una oportunidad para que los acreedores que se han visto afectados con la situación de crisis de la empresa deudora, puedan recuperar sus acreencias dentro de los plazos y procedimientos establecidos por la autoridad competente.

Además, la crisis sanitaria y el aislamiento social obligatorio, impuesto por el estado, afectó a una cantidad considerable de personas jurídicas y personas naturales. Esta crisis trajo como consecuencia que para el segundo trimestre del año 2020, el PBI del Perú se contrajera en un 30%, golpeando directamente a las empresas, sus proveedores y trabajadores.

A razón de ello es pertinente evidenciar en el siguiente cuadro el impacto negativo que tuvo el PBI para el Perú, debido al confinamiento impuesto por el estado.

PERÚ: Oferta y Demanda Global Trimestral
(Variación porcentual del índice de volumen físico respecto al mismo período del año anterior)
Año Base 2007=100

Oferta y Demanda Global	2019/2018					2020/2019				
	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Año	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Año
Producto Bruto Interno	2,5	1,3	3,2	1,9	2,2	-3,7	-30,0	-9,0	-1,7	-11,1
Extractivas	0,4	-2,1	0,6	1,8	0,1	-3,1	-20,4	-7,3	-1,8	-8,5
Transformación	0,1	-2,6	3,8	-2,6	-0,5	-10,8	-44,8	-6,7	6,9	-13,6
Servicios	3,8	3,9	3,9	3,8	3,8	-1,2	-28,0	-9,7	-4,9	-11,0
Importaciones	1,0	1,5	3,5	0,8	1,7	-4,5	-31,3	-20,1	-3,5	-14,9
Oferta y Demanda Global	2,2	1,3	3,3	1,7	2,1	-3,8	-30,2	-11,4	-2,0	-12,0
Demanda Interna	2,8	2,5	4,6	1,5	2,8	-3,4	-28,0	-9,4	0,8	-10,1
Consumo Final Privado	3,6	2,9	3,4	3,1	3,2	-1,7	-22,1	-9,1	-1,5	-8,8
Consumo de Gobierno	1,5	3,7	7,0	2,3	3,6	7,1	-3,1	3,9	22,8	8,2
Formación Bruta de Capital	1,4	0,8	6,6	-2,9	1,3	-13,5	-57,2	-17,5	-5,5	-23,4
Formación Bruta de Capital Fijo	1,4	5,6	5,3	-0,6	2,8	-9,7	-56,3	-9,7	11,3	-15,6
Público	-7,9	6,2	0,7	-3,3	-0,6	13,3	-68,9	-23,1	9,9	-21,3
Privado	3,7	5,4	6,6	0,2	3,8	-14,8	-51,7	-6,3	11,7	-14,0
Exportaciones	-0,3	-3,0	-1,2	2,4	-0,5	-5,4	-38,8	-18,8	-12,4	-19,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Es evidente la incidencia directa que generó en las ventas de las empresas, y obligó a asumir costos fijos propios del giro del negocio. La disminución de estas ventas repercutió en la liquidez de las empresas. Sin embargo, el gobierno peruano puso a disposición una serie de medidas económicas para mitigar el impacto de la COVID-19. Entre ellas se puede destacar la adopción de medidas, como el subsidio a la planilla y aplazamiento de depósito de CTS. También, la disposición de las medidas de alivio tributario, tales como la prórroga de la declaración y pago mensual del impuesto general a las ventas y prórroga de hasta cuatro meses en la presentación y pago del impuesto a la renta anual del 2019. Permitió también la liberación de las detracciones y otras facilidades a los deudores tributarios.

Asimismo, como parte de este paquete de medidas económicas, se distingue la creación del programa Reactiva Perú, el cual dentro de sus disposiciones contempla el otorgamiento de crédito a los empresarios, a un interés

bajo debido a la garantía concedida por el gobierno central a los bancos, logrando de esta manera evitar la ruptura para la cadena de pagos.

Además, dentro de estas medidas adoptadas por el gobierno, se creó el PARC para sumar a los dos procedimientos concursales ya regulados. Este procedimiento acelerado de refinanciamiento concursal presenta algunas características que son analizadas en la presente propuesta de tesis, para determinar si cumplió con el objetivo para el cual fue creado, y si tiene visos de mejora.

De igual modo se analiza la celeridad del procedimiento, el ámbito de aplicación de este procedimiento concursal, la eficiencia del mismo y su requerimiento de mejora para el procedimiento gracias al empleo de un PARC 2.0. Esta investigación se considera útil a propósito de determinar qué tan eficiente y racional fue el PARC, y con la base en los hallazgos de esta ejecución investigativa proponer mejoras en la creación de un PARC 2.0.

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo General

Evaluar el desempeño del PARC en el sistema concursal peruano bajo la medición de la eficiencia y racionalidad.

1.2.2. Objetivos Específicos

- a) Analizar el alcance y las limitaciones del PARC.
- b) Evaluar la mejora del PARC a una versión PARC 2.0 como opción para evitar la ruptura de la cadena de pagos.
- c) Conocer la estructura y funcionamiento del PARC, para determinar si durante su vigencia este ha tenido una repercusión favorable en el sector empresarial.

1.3. JUSTIFICACION Y CONTRIBUCIÓN

Es inevitable pasar por alto los estragos de esta crisis sanitaria y financiera por la cual está atravesando el mundo. Las distintas sociedades en medio de restricciones y confinamientos impuestos por los gobiernos, han quedado afectadas directamente en el aspecto económico. Es evidente que el Perú no escapa a esta realidad; según el informe técnico del IV trimestre del INEI, el PBI del Perú en el año 2020 se contrajo en un 11.1% y esto es debido a las medidas tomadas por el estado de emergencia nacional para afrontar los efectos de la COVID - 19. (01-Informe-Tecnico-PBI-IV-TRI- 2020.pdf)

Ahora bien, la contracción del PBI se dio como consecuencia de que muchas empresas tuvieron que mantenerse cerradas u operaron con personal reducido por la caída de sus ventas, gracias al confinamiento impuesto por el estado, perjudicándose así de una manera directa sus ingresos.

En otro orden de ideas, con el paso de los años los procedimientos concursales se han vuelto menos atractivos y más lentos, no caminando a la velocidad que exige el mundo competitivo empresarial, perjudicando así a las empresas y condenándolas a una disolución y posterior liquidación.

Es así como, la relevancia de estudiar el PARC es abordar un problema que abarca un gran sector de la economía. La problemática de las empresas en insolvencia debe ser tratada de una manera eficiente y racional. A través de esta propuesta de tesis se plantea un nuevo PARC 2.0 que subyace como una alternativa de mejora para la eficiencia de los procesos concursales.

Se ha desarrollado el análisis del PARC el cual concluyó el 31 de diciembre del 2020, comparándolo con la legislación de otros países, teniendo como evidencia la experiencia de los mismos en relación con los procesos concursales, evaluando existencia de oportunidades de mejora que se pueden adoptar para la creación de un PARC 2.0.

De este modo se evidencia la situación real en la cual se encuentra el país en estudio en comparación con otras naciones, para así determinar si la legislación de este PARC resultó conveniente para los efectos generados por la COVID – 19. Idealmente la reestructuración es la opción mediante la cual las empresas que están pasando por una crisis financiera, y aún son viables, permanecen operando

y generando recursos, a razón de que en un plazo determinado puedan pagar sus deudas y de este modo los acreedores no se vean perjudicados ante alguna liquidación.

En concreto, se asume que el aporte de un nuevo PARC 2.0, ante la comunidad científica, representa una alternativa de respuesta a las necesidades financiera que atraviesan las empresas, a fin de alcanzar un refinanciamiento exitoso con sus acreedores.

1.4. ALCANCE

Esta investigación parte del análisis del PARC que fue creado como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID – 19, a fin de evitar la ruptura de la cadena de pagos. Con base en este análisis, se definió un nuevo procedimiento Fast-Track, rápido y eficiente, que otorga soluciones versátiles a las personas naturales y jurídicas que se encuentran frente a una crisis financiera.

Dentro de los hallazgos procedimentales se dieron pasos firmes a razón de que este nuevo PARC 2.0, no solo conserve vigencia durante la situación de pandemia ocasionada por el COVID -19, sino para que sea permanente, versátil y eficiente, cumpliendo con los principios básicos del derecho concursal de universalidad, colectividad y proporcionalidad.

Además este estudio investigativo expresa entre otras cosas que para conseguir el reflotamiento empresarial eficiente y racional es necesario implementar un nuevo mecanismo Fast-Track de refinanciamiento denominado PARC 2.0.

1.5. LIMITACIONES

Esta tesis analiza el PARC por lo que se empleó la información pública de las entidades gubernamentales y entidades privadas relacionadas con este nuevo procedimiento concursal cuya vigencia caducó el 31 de diciembre de 2020. Es así como se tiene dentro de las principales limitantes las restricciones de información

por el corto tiempo que estuvo vigente el PARC y por las actuales circunstancias de distanciamiento social en las que se vive a causa de la COVID- 19.

2. CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL

2.1.Cuestión Previa

En cuanto a la normativa concursal –Ley General del Sistema Concursal No. 27809- se pueden distinguir dos procedimientos concursales claves para la permanencia en el mercado de una empresa y/o para su disolución y liquidación: el Procedimiento Concursal Ordinario (PCO) y el Procedimiento Concursal Preventivo (PCP). La presente investigación aborda, desde la perspectiva de lo hecho por el Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal, llamado también “PARC”, una serie de propuestas para mejorar el acceso y el desarrollo del procedimiento para las personas jurídicas que se acojan a el.

Es de hacer notar que el Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal (por sus siglas llamado también “PARC”) entró en vigencia a través del Decreto Legislativo N° 1511, el 08 de junio de 2020, teniendo como fecha límite el 31 de diciembre de 2020. El PARC nace como consecuencia de la entrada en la crisis financiera de distintas empresas en Perú a causa de la ruptura de la cadena de pagos que generó la inmovilización social obligatoria por la pandemia mundial originada por el Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19).

De modo que, el impacto económico y sanitario de la pandemia sobre la situación de las familias y de las unidades empresariales fue más duro que lo previsto por las autoridades gubernamentales, situación que se explica en parte por el carácter dinámico de la enfermedad, por la respuesta social a la misma y por los errores en la gestión pública de los instrumentos diseñados para atender la crisis, tales como lentitud en el dictado de regulaciones, eventual superposición de normas potencialmente enfrentadas entre sí y otros. Si bien inicialmente las expectativas incluían una alta dosis de prudencia, los resultados a la fecha indican que las consecuencias de la pandemia sobre el tejido social y económico en el Perú trascendieron en el corto e, incluso, el mediano plazo (De la Puente; Barrón, 2020).

Por un lado, las cifras de la dimensión sanitaria de la pandemia no han sido nada alentadoras, pues a fines de agosto del 2020 el país mostraba registros muy preocupantes: 613 000 casos positivos de contagio con COVID-19 y 28 124 fallecidos por COVID-19. Por otro lado, las cifras en cuanto al comportamiento de la producción nacional mostraron caídas del orden de 16.66 % en marzo del 2020, 39.93 % en abril del 2020, 32.72 % en mayo del 2020 y de 18.06 % en junio del 2020 (De la Puente; Barrón, 2020).

A su vez, otras fuentes como la publicación Newsroom Infobae refieren que hubo una contracción en el segundo trimestre del 2020 frente al mismo período del año anterior en el orden del 30.2%. Sumada a la contracción del primer trimestre del 2020, que alcanzó el 3.5%, y contrastada con el primer trimestre del 2019, es indicativo que para junio del 2020 técnicamente se estuvo en una situación de recesión.

Si bien la afectación al tejido empresarial del país es de carácter general, ha golpeado de manera diferenciada a los sectores productivos. Así, durante el mes de junio del 2020 —comparado con el mes de junio del 2019—, la economía cayó 18.06%, mientras que los principales sectores que mostraron mayor contracción fueron los siguientes:

- Alojamiento y restaurantes: -84.35 %
- Construcción: -44.64 %
- Transporte, almacenamiento, correo y mensajería: -44.23 %
- Servicios prestados a empresas: -35.77 %
- Comercio: -27.98 %

Por otro lado, los principales sectores que mostraron un crecimiento fueron los siguientes:

- Pesca: 48.05 %
- Financiero y seguros: 15.51 %
- Telecomunicaciones y otros: 4.43 %

Realizando comparaciones semestrales año a año, los únicos sectores que mostraron dinamismo fueron los siguientes:

- Agropecuario: 2.05 %
- Telecomunicaciones: 2.62 %
- Financiero y seguros: 6.66 %

- Administración pública: 4.18 %

A pesar de la existencia de sectores dinámicos, el comportamiento total de la economía de enero-junio del 2020 frente a enero-junio del 2019 mostró una contracción de -17.37 %. En algunos sectores, la data permite apreciar el tamaño del impacto de la situación económica, social y sanitaria y, al mismo tiempo, darse cuenta de que más de uno vivió y vive una situación de gravísima afectación, como es el caso de estos sectores:

- Alojamiento y restaurantes: -51.67 %
- Transportes: -44.23 %
- Construcción: -29.68 %
- Comercio: -27.62 %
- Manufactura: -22.45 %
- Minería e hidrocarburos: -20.11 %

(De la Puente; Barrón, 2020).

Lastimosamente durante la vigencia del PARC, no fueron muchas las personas jurídicas en el Perú que decidieron acogerse a dicho procedimiento, esto debido principalmente a la falta de publicidad e información clara sobre el desarrollo del procedimiento y los efectos que este causaría en la empresa sometida al PARC.

Siendo ello así, se evidencia que el PARC no logró tener el éxito deseado por el Estado Peruano, haciéndose necesario que el procedimiento se renueve con el fin de lograr acoger a la mayor cantidad de personas jurídicas que se encuentran en crisis financiera a causa de la pandemia global.

2.2. Diseño del PARC bajo el Decreto Legislativo No. 1511

Como antecedentes, se tiene que a fines de 1999 hubo disposición para la creación del Procedimiento Transitorio, que convivió por aproximadamente dos años con los demás procedimientos existentes en esa época, es decir, el ordinario, el preventivo y el simplificado. En esencia este nuevo procedimiento fue de aplicación tanto para personas naturales con negocio como para personas jurídicas. Su administración fue de naturaleza mixta, pues participaron en ella el

Indecopi y un grupo de fedatarios, básicamente notarios (De la Puente; Barrón, 2020).

El procedimiento tuvo vigencia hasta fines del 2001. En ese período, hubo 952 solicitudes, 371 correspondientes a personas naturales y 581 correspondientes a personas jurídicas. Éstas cifras representaron el 27.0 % de todas las solicitudes acogidas de personas naturales en el período de análisis y el 34.5 % del total de solicitudes acogidas de personas jurídicas en el mismo período. En definitiva, los procedimientos transitorios representaron el 31.1 % de todas las solicitudes acogidas. Se demuestra, así, que el procedimiento no solo fue de interés concreto de casi mil agentes económicos, sino que se ejecutó en un período en el que se tramitaron más de 3000 solicitudes⁴, cifra no repetida hasta hoy.

Ahora bien, sus ventajas fundamentales fueron la relativa rapidez del procedimiento, debido a la eliminación o reducción de ciertos requisitos tradicionalmente presentes en la legislación concursal local, sobre todo, en las etapas de postulación del procedimiento y verificación de créditos. Sus desventajas se ubicaron fundamental y curiosamente en la propia descentralización de las actividades en favor de los fedatarios —quienes no mostraron la misma rigurosidad regulatoria que Indecopi—, la superposición de otras normas de carácter legal (legislación conexas) y otras (De la Puente; Barrón, 2020).

Es de hacer notar que el Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal (PARC) entró en vigencia a través del Decreto Legislativo N° 1511 y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 102-2020-PCM. El PARC estuvo dirigido a “Entidades Calificadas” conformadas por todo tipo de personas jurídicas (micro, pequeñas, medianas y grandes empresas), así como asociaciones. El objetivo del PARC era permitir que las Entidades Calificadas celebren con sus acreedores un “Plan de Refinanciación Empresarial” (por sus siglas llamado “PRE”), a efectos de:

- i) Reprogramar sus obligaciones
- ii) Evitar la caída en insolvencia
- iii) Evitar la pérdida de negocios
- iv) Evitar la pérdida de fuentes de empleo

- v) Asegurar la recuperación crediticia
- vi) Asegurar la continuidad de la cadena de pagos

De acuerdo con las facultades delegadas, la estrategia para proteger los sectores productivos tenía dos líneas de acción:

- Recomponer el capital de trabajo de las empresas, que estaban siendo seriamente afectadas por la abrupta paralización de la economía, para lo cual, mediante Decreto Legislativo 1455 publicado el 6 de abril del 2020 y modificado por Decreto Legislativo 1457 publicado el 12 del mismo mes y año, creó el Programa de Garantías del Gobierno Nacional denominado Reactiva Perú.
- Crear un procedimiento concursal célere, que permita a las empresas refinanciar sus obligaciones con sus trabajadores, entidades financieras y proveedores de bienes y servicios, para lo cual mediante Decreto Legislativo 1511 se creó el Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal (PARC). Este decreto se pudo publicar recién el 11 de mayo del 2020 (De la Puente; Barrón, 2020).

Es importante destacar que, las Entidades Calificadas contaron desde el 08 de junio de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 para acogerse de manera electrónica al PARC; esto es, desde la solicitud de acogimiento, pasando por el reconocimiento de créditos hasta la realización de la Junta de Acreedores y la aprobación del PRE.

Dentro de las condiciones para el acogimiento al PARC se encontraban las siguientes¹:

- i) Estar clasificada en el Sistema Financiero, en la categoría de “Normal” o “Con Problemas Potenciales”. En caso de no contar con clasificación a dicha fecha, no haber estado en una categoría diferente a la categoría “Normal” considerando los doce meses previos al

¹ Artículo 5 del Reglamento del PARC

otorgamiento del préstamo. También se considerarán con categoría “Normal” aquellas que no cuenten con ninguna clasificación en los últimos doce meses.

- ii) No encontrarse sometida a un procedimiento concursal ordinario, sea a pedido propio o de acreedores, ni a un procedimiento concursal preventivo que se encuentren difundidos en el Boletín Concursal conforme a lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley General del Sistema Concursal.
- iii) No encontrarse en el supuesto previsto en el artículo 24.1 b) de la Ley General del Sistema Concursal o en cualquiera de los supuestos de disolución establecidos en el artículo 407 de la Ley General de Sociedades.
- iv) No tener pérdidas que hayan afectado más de un tercio de su capital social.

Sin duda alguna, con la presentación de la solicitud de acogimiento por parte de la persona jurídica, la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi (la Comisión) contaba con un plazo de 05 días hábiles para verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, en cuyo caso emitiría una resolución de admisión a trámite de la solicitud y disponiendo la publicación del aviso de inicio del PARC de la Entidad Calificada en el Boletín Concursal del Indecopi, en un plazo no mayor de 05 días hábiles contados a partir de la emisión de la resolución admisorio.

Asimismo, una vez publicado en el Boletín Concursal del Indecopi el acogimiento de una Entidad Calificada al PARC, ésta gozaba de la suspensión de exigibilidad de todas sus obligaciones y de la protección legal de su patrimonio hasta la aprobación o desaprobación del “PRE”. Con la publicación del inicio del PARC en el Boletín Concursal del Indecopi, los acreedores de la Entidad Calificada podían presentar sus solicitudes de reconocimiento de créditos en un plazo no mayor de 10 días hábiles contados desde el día siguiente de realizada la publicación del acogimiento.

También las solicitudes de reconocimiento de créditos serían declaradas improcedentes en caso se presentaran de forma extemporánea. Los créditos laborales y aquellos que nacen como consecuencia de una relación de consumo, los vinculados y los discutidos en sede jurisdiccional (estos últimos contingentes), no fueron pasibles de reconocimiento; sin embargo, si debían ser incluidos en el cronograma de pagos del PRE. Además, la instalación de la Junta de Acreedores estuvo prevista para realizarse de forma virtual con la participación de un Notario Público. Bajo el esquema previsto por el PARC, la Junta de Acreedores no se encontraba en la capacidad de tomar el poder de la administración de la Entidad Calificada, siendo el único objetivo de la instalación de la Junta de Acreedores la aprobación o desaprobación del PRE. La aprobación o desaprobación del PRE genera la conclusión del PARC, sin la necesidad de esperar pronunciamiento alguno del INDECOPI.

Para la aprobación del Plan de Refinanciación Empresarial (PRE) se debían de contemplar los siguientes puntos:

- i) La refinanciación de la totalidad de los créditos
- ii) El tratamiento y cronograma de pagos por cada clase de acreedor
- iii) La tasa de interés aplicable
- iv) El nombramiento de un supervisor (en caso más del 30% de acreedores lo solicite)

Para la aprobación del PRE se requería del voto favorable de los acreedores que representasen créditos reconocidos por un importe superior al cincuenta por ciento (50%) del total de dichos créditos. Tanto los acreedores laborales como los vinculados no participaban en la conformación del quórum de la Junta de Acreedores; por tanto, no eran considerados en el quórum de instalación y carecían de derecho de voto.

No obstante, el incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en el PRE por parte de la Entidad Calificada generaba la resolución automática del PRE, y como consecuencia de ello, el derecho de la totalidad de acreedores de

recurrir a la vía jurisdiccional para requerir el pago de sus créditos en los términos originalmente acordados.

2.3. Modelos Internacionales de Pre-Pack Concursal

2.3.1. Pre-Pack y Pre-Plan Sales en EE.UU

El “Pre-Packaged Bankruptcy” hace referencia a la reestructuración de empresas en crisis financiera haciendo uso del procedimiento establecido en el Capítulo 11 del “Bankruptcy Act” de los Estados Unidos de América, el que comienza una vez que el plan de reestructuración se ha negociado y se han alcanzado el número de votos necesarios para su aprobación.

Se distingue que, la clave del procedimiento del Capítulo 11 de los EE. UU, es permitir que la administración de la empresa en problemas retenga el control de la empresa durante el proceso de reorganización. El deudor se convierte en un deudor en posesión por defecto tras la presentación de reorganización del capítulo 11 y sólo en situaciones excepcionales se nombrará un administrador externo (Xie, 2016).

Según Massel, los Pre-Packs mantienen ventajas importantes frente a otros tipos de acuerdo de reestructuración, en virtud de que el deudor puede decidir negociar directamente con acreedores clave sin esperar el voto aprobatorio de los demás acreedores, reduciendo de esta manera la incertidumbre sobre su estado financiero y consiguiendo apoyo para el plan de reestructuración antes del inicio del procedimiento bajo el Capítulo 11.

El procedimiento convencional del Capítulo 11, tal como se diseñó en el Código de Quiebras de 1978, a menudo fue criticado por tomar mucho tiempo, ser caro e ineficiente. En general, se aceptó que el enfoque único para la reorganización empresarial adoptado en el código de 1978 ha demostrado no ser tan exitoso y el diseño del capítulo 11 para casos importantes ha causado demoras irrazonables y costos onerosos en la mayoría de los casos (Xie, 2016).

Por otro lado, el “Pre-Plan Sale”, es una variante en la que se transfieren los activos tangibles e intangibles del deudor antes de que se apruebe el plan de reestructuración financiera bajo los alcances del procedimiento contenido en el Capítulo 11 del “Bankruptcy Act”.

Bajo la regulación de los Estados Unidos de América, la insolvencia “pre-pack” se configura cuando entre el deudor y sus acreedores se aprueba un plan de reestructuración antes de que se presente la solicitud de inicio del procedimiento regulado bajo el Capítulo 11 del “Bankruptcy Act” ante el Juez competente. Dentro de esta situación se pueden presentar dos escenarios, la pre-negociación o la pre-votación. En el primer escenario, solo ha existido una negociación con los acreedores, mientras que en el segundo escenario, la negociación ha alcanzado el nivel de votos oficial para su implementación.

Durante la conformación del borrador del plan de reestructuración, entre el deudor y sus acreedores, existe una negociación cuyo objetivo es buscar –desde la perspectiva del deudor- que la empresa permanezca el menor tiempo posible sometida a los alcances del plan.

Es pertinente acotar que, en ambos casos, el plan de reestructuración es presentado ante la Corte pertinente; no obstante, la diferencia radica en que en el primero de los casos se presenta la solicitud, el plan de reestructuración y la declaración de divulgación para con los demás acreedores, mientras en el segundo caso se presenta además el resultado oficial de la votación, debiendo la Corte para este último escenario hacer el conteo oficial de votos y determinar si el plan es vinculante para con los demás acreedores, en caso hayan sido debidamente informados sobre el contenido del plan y haya sido previamente requeridos para que voten.

Además, la declaración de divulgación se debe de redactar de acuerdo a los alcances previstos en la Sección 1125 del “Bankruptcy Act”; caso contrario, esto podría ocasionar que la votación se invalide, debiéndose redactar una nueva declaración de divulgación con un nuevo conteo de votos. Se entiende por información adecuada a la información suficiente, detallada y razonable tomando en consideración la historia del deudor y la condición de sus libros contables que permita a un inversionista razonable realizar un juicio informado acerca del plan de reestructuración (Xie, 2016).

Típicamente, la declaración de divulgación contiene una valuación del deudor o de sus activos, la descripción del negocio, las razones de la crisis del deudor y las medidas necesarias para revertir esta situación, información financiera actual e histórica del deudor, eventos materiales que sucedan o puedan suceder luego de

la solicitud presentada a la corte, un resumen del plan de reestructuración, los medios necesarios para llevar a cabo el plan de reestructuración, garantías que se ofrecen, proyecciones, administración propuesta luego de la confirmación del plan, derechos de partes vinculadas, transacciones con partes vinculadas, derechos o créditos en discusión, procedimientos legales en trámite, consecuencias tributarias para el deudor, existencia de comités y análisis sobre la posible liquidación del deudor (Xie, 2016).

Por otro lado, los “Pre-plan sales” bajo el Capítulo 11 del “Bankruptcy Act”, buscan una salida rápida y ordenada del mercado a través de la venta de activos de la empresa. La Sección 363(b) del “Bankruptcy Act” permite las “pre-plan sales”, que son, básicamente, la venta de todos los activos o los activos sustanciales para el negocio fuera y antes del plan de reestructuración (Xie, 2016).

Es importante precisar que, los “pre-plan sales” son un método acertado para la venta de activos de la empresa, dado que resultan rápidos, reduciendo el costo, los riesgos y la incertidumbre. En las reorganizaciones, la venta de activos puede tener lugar antes de cualquier petición de quiebra o durante el procedimiento de quiebra (Xie, 2016).

Por otro lado, la venta de los activos se puede configurar de dos maneras: privada o mediante subasta pública, debiéndose notificar la venta antes de que se realice a todos los interesados llevándose posteriormente una audiencia frente a la Corte pertinente para la aprobación de la venta. Además, los bienes se transfieren libres de cargas, gravámenes y obligaciones que el deudor mantenga frente a sus acreedores. Por otro lado, estas ventas solo requieren la confirmación de la corte luego de que han sido notificadas a todos los interesados, lo cual les da el beneficio crítico de la rapidez (Xie, 2016).

Sin embargo, la reorganización a través del Capítulo 11 tradicional o su ruta Pre-Pack no es la mejor manera de lidiar con las empresas con dificultades financieras. La realización de los bienes a través de las ventas comerciales son una solución rápida y más barata para tratar con una empresa en dificultades financieras y, como es de esperar, a menudo es la ruta preferida para obtener valor (Xie, 2016)

2.3.2. Pre-Packaged en el Reino Unido

Bajo la legislación del Reino Unido, la figura del Pre-Pack Concursal ha tenido un crecimiento significativo versus lo ocurrido en otras latitudes. Como ya se mencionó, las empresas con opciones de financiamiento limitadas buscan minimizar los costos administrativos asociados con los procedimientos legales completos optando cada vez más por las quiebras pre-packaged, en un esfuerzo por acelerar el proceso (Xie, 2016).

Al respecto, en el Reino Unido las empresas en situación de crisis financiera pueden contratar los servicios de una figura llamada Insolvency Practitioner (IP). El “Insolvency Practitioner” es un profesional experto en administración concursal de empresas en crisis, cuya cualidad es que opera antes del inicio del procedimiento concursal, con el objetivo de que lleve adelante el proceso de venta de la unidad productiva bajo la figura de la Pre-pack Administration.

De este modo se logra anticipar la declaración de inicio de concurso, logrando evitar el “fire sale” o “venta urgente” que limita en gran medida la capacidad de negociación que tiene el deudor con los posibles compradores del negocio en marcha.

Una vez iniciado el procedimiento concursal, el Insolvency Practitioner pasa de supervisar el proceso de venta de la unidad productiva a ser el administrador concursal, emitiendo opinión para que el juzgado pueda tomar una decisión con las garantías necesarias.

Uno de los objetivos del “pre-pack” es proteger al deudor del estigma y la pérdida de confianza que significa encontrarse en un procedimiento de insolvencia. En las administraciones “pre-pack” la venta del negocio se acuerda con potenciales compradores y acreedores antes del inicio del procedimiento de administración y se concreta casi inmediatamente luego de la designación del administrador (Xie, 2016).

En efecto, una opción pre-pack para la venta del negocio en marcha preserva el valor del negocio, conserva empleos y máxima resultados para los acreedores. Las negociaciones en un “pre-pack” tienen dos enfoques diferentes: (i) un acuerdo de venta que se prepara antes del inicio del procedimiento de administración por los directores de la empresa con asistencia de consejeros; o (ii) el administrador ha estado involucrado en el proceso de negociación desde el principio, pero sin ostentar el cargo de administrador. Cualquiera que sea el caso, las decisiones o acciones que se adopten en la etapa informal producen una configuración inicial

y establecen una única opción para la empresa, por lo que se entra al procedimiento de administración con un fuerte sesgo a cumplir lo establecido en el acuerdo “pre-pack” (Xie, 2016).

Cuando por fin se nombra oficialmente al administrador, la condición en la que se encuentre la empresa puede ser: (i) que el acuerdo de venta del negocio esté correctamente arreglado y las condiciones sean las adecuadas para materializar la venta de forma inmediata; o (ii) que la empresa ya no tenga liquidez para continuar con sus operaciones y que la rápida consolidación de la venta del negocio se presente como la única opción para asegurar la continuidad de la relación con los consumidores y proveedores. En esta última situación, la forma más rápida, eficiente y que generará mayores recursos de concretar la venta es materializar lo acordado en la etapa informal, es decir, lo dispuesto en el acuerdo “pre-pack”. Aun así existan otras opciones, con el paso del tiempo se corre el riesgo de perder apoyo de los acreedores importantes, lo cual sería fatal para la empresa y su negocio (Xie, 2016).

La estrategia más usada en las ventas “pre-pack” es la venta del negocio en marcha. Esto se debe a que de este modo se genera mayor valor que si se venden los activos por separado. Debido a esto, el segundo objetivo de los procedimientos de administración es el que persiguen las insolvencias “pre-pack” al conseguir un mayor retorno para los acreedores de lo que lograrían conseguir en una liquidación. Esto, sin embargo, genera la pregunta de si se ha considerado la viabilidad de cumplir con el primer objetivo de los procedimientos de administración, ya que, como se ha explicado, no se puede pretender cumplir el segundo objetivo sin antes haber descartado la viabilidad del primero (Xie, 2016).

En efecto, los administradores expertos no necesitan de la autorización de una corte para emprender la venta de los activos, ello con el fin de no perjudicar a los acreedores ni al deudor, siempre que exista una justificación comercial válida que de carácter urgente. Es sumamente recomendable que previo a la venta de la unidad productiva se recurra a los acreedores garantizados y no garantizados con el fin de no excluirlos completamente de estas decisiones.

Además, los “pre-packs” son una forma de satisfacer las preferencias de los acreedores más importantes al permitir que la empresa deudora llegue a un acuerdo con ellos en la etapa informal y luego inicie el procedimiento de

administración. Esto permite que jugadores clave tengan una posición de control y se asegure su apoyo al plan para el deudor. A fin de cuentas, si los principales acreedores no apoyan una solución esta no se materializará (Xie, 2016).

El “pre-pack” minimiza el tiempo del procedimiento de administración, incrementa las oportunidades de rescatar el negocio y la empresa y es necesario para mantener una buena práctica de negocios en el mundo de hoy. La rapidez y publicidad de los tratos de negocios es crucial para conservar el valor de la empresa y del negocio, en especial para aquellos que dependen de su imagen pública o los que tienen activos intangibles importantes (como marcas). Estas partes del negocio pueden verse muy afectadas con la reacción negativa de consumidores y del mercado ante el procedimiento de administración. Cabe recordar que las empresas en administración pierden valor cada día que pasan sometidas al procedimiento, y muchas veces es difícil (si no es imposible) conseguir el financiamiento necesario para llevar a cabo un rescate sofisticado. Las ventas “pre-pack” maximizan el excedente que estará disponible para distribuir a los acreedores, además de salvar puestos de trabajo, relaciones con consumidores y proveedores y darle una segunda oportunidad al negocio (Xie, 2016).

Los “pre-packs” tienen méritos convincentes en la preservación del valor del negocio. Apuntan a vender el negocio como negocio en marcha y pueden ser la mejor opción a seguir para salvaguardar los intereses de los acreedores. Permiten que se lleve a cabo el trabajo de preparación necesario en una etapa temprana, sin presión del público, y aseguran una disposición a tiempo del negocio para salvar partes del mismo que, de otra forma, se perderían. Su naturaleza predeterminada ofrece un alto nivel de certeza y control a los participantes, y atrae apoyo esencial de los acreedores más importantes (Xie, 2016).

Un inconveniente de los pre-packs son las ventas de las unidades de negocio a vinculados. Estas ventas a partes vinculadas se dan, en la mayoría de ocasiones, porque existe una crisis a nivel sectorial y los competidores, que serían los naturalmente interesados en adquirir el negocio, no quieren expandir sus operaciones u ofrecen precios bajos, y los inversionistas, aprovechando la crisis sectorial, también ofrecen precios bajos. Por el contrario, alguien que conoce el negocio puede ofrecer un precio justo, sin mencionar que en estos casos la venta a un vinculado puede ser la única opción para salvar el negocio (Xie, 2016).

Como se ha referido anteriormente, el marketing en una venta “pre-pack” es limitado por una serie de razones: falta de fondos, se corre el riesgo de hacer pública la situación de crisis de la empresa (lo cual traería pérdida de clientes, acciones de cobranza, pérdida de proveedores, entre otros) y es poco probable que el mercado esté dispuesto a hacer ofertas en un tiempo tan corto (Xie, 2016). Sin embargo, una venta “pre-pack” es la forma de evitar la pérdida de valor que resulta de la reacción negativa del mercado y los consumidores ante la incertidumbre que plantea la insolvencia (Xie, 2016).

La controversia y sensibilidad que rodea a las ventas “pre-pack” se resuelve obteniendo valuaciones independientes del negocio. Estas deben ser parte integral de cualquier venta “pre-pack”, en especial cuando el mercado no ha sido examinado adecuadamente. Las valuaciones independientes pueden demostrar que el proceso ha sido justo y pueden ser una defensa efectiva contra reclamos posteriores. Para que los acreedores entiendan adecuadamente la transacción, la valuación deberá contener una explicación acerca de la naturaleza de los activos, los montos asignados a cada activo, el método utilizado para determinar el valor, los términos del encargo al valuador y deberá incluir la totalidad de activos (tangibles e intangibles) (Xie, 2016).

Estos problemas de transparencia se solucionan con la declaración que el administrador está obligado a presentar. Esta declaración debe indicar los detalles de su designación, cómo se alcanzará el objetivo del procedimiento de administración, cómo finalizará el procedimiento de administración, cómo se ha manejado la empresa desde su designación, si se han vendido activos, la razón de la venta de activos y los términos y condiciones de la venta. En el caso de una venta “pre-pack”, la declaración deberá indicar también si trabajó antes de su designación oficial en la elaboración del acuerdo “prepack”, los honorarios que recibió, cuál fue su trabajo, porqué empezó a trabajar antes de su designación oficial como administrador, y cómo su trabajo ayudó a alcanzar el objetivo del procedimiento de administración (Xie, 2016).

Finalmente, en cuanto a las ventas “pre-pack”, las cortes consideran que el administrador es el indicado para lidiar con ellas y que no deberían interferir con sus decisiones comerciales, a menos que no sean racionales. El papel de la corte

está diseñado para que el administrador pueda actuar rápido y sin temer demoras por una posible revisión de sus decisiones (Xie, 2016).

2.3.3. Pre-Packs y Fast-Tracks en Sudamérica

2.3.3.1. Chile

La Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas –Ley No. 20.720-. Es un procedimiento administrativo, gratuito y voluntario, cuya finalidad es que la persona deudora pueda renegociar sus deudas con nuevas condiciones de pago o vender sus bienes para el pago de las mismas. En este procedimiento, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) tiene como función actuar como facilitadora de acuerdos, ayudando a que las partes, deudor y acreedores, puedan adoptar una solución satisfactoria.

Esta ley les permite a las personas y empresas que se encuentran en crisis financiera, salir de su situación de endeudamiento y reemprender a través de herramientas legales según sean:

- Micro, pequeñas, medianas o grandes empresas.
- Personas jurídicas sin fines de lucro.
- Personas naturales.

La ley plantea distintas herramientas como una alternativa para que aquellas personas o empresas que se encuentran en una situación financiera agravada puedan hacer frente a esta crisis.

En relación con las empresas, la normativa establece dos herramientas que permiten:

- Salvar aquellos emprendimientos que tienen posibilidades de mantenerse en el tiempo.
- Liquidar los bienes de aquellas empresas que no puedan salvarse.

Respecto a las personas, la normativa establece dos herramientas que permiten:

- Renegociar las deudas con nuevas y mejores condiciones de pago.

- Liquidar los bienes mediante una venta rápida y ordenada para pagar las deudas.

Dentro de la reestructuración, la ley chilena prevé la posibilidad de llegar a acuerdos extrajudiciales con los acreedores a través de un Pre-Pack. En ese sentido, las empresas en estado financiero crítico puede celebrar un acuerdo de reestructuración extrajudicial o simplificado con sus acreedores, debiendo luego llevar este acuerdo ante el tribunal judicial competente a fin de que sea aprobado.

Dentro del acuerdo fedateado se pueden establecer medidas que se encuentren destinadas a reestructurar los activos y pasivos del deudor en beneficio de sus acreedores.

Es requisito indispensable que el deudor y sus dos primeros acreedores nombren un veedor a fin de que presente un informe sobre si:

1. La propuesta cuenta con posibilidades de ser cumplida a futuro,
2. En caso de liquidación del deudor se determine el porcentaje que le correspondería a cada acreedor; y,
3. La prelación de los créditos y su preferencia para el pago se enmarca a lo dispuesto por ley.

El convenio de reestructuración deberá de ser firmado por dos o más acreedores que representen por lo menos $\frac{3}{4}$ partes del total del pasivo el deudor. En este acuerdo no participan las partes relacionadas no pudiendo ser considerados sus créditos para el cálculo del pasivo necesario para la aprobación del acuerdo.

Una vez presentada la solicitud al Tribunal, el patrimonio del deudor pasa a tener la calidad de inejecutable, no pudiendo los acreedores solicitar la liquidación del deudor. La solicitud es publicada en el Boletín Concursal y se envía por correo electrónico a los acreedores declarados.

2.3.3.2.Colombia

El Pre-Pack colombiano se rige por lo dispuesto por la Ley No. 1116 –Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia-.

Esta ley tiene como finalidad la recuperación y preservación de todas aquellas empresas que son financieramente viables, pero que atraviesan por una situación coyuntural que les impide el pago de sus obligaciones. La norma tiene dos objetivos, dependiendo de la situación financiera en la que se encuentre el deudor:

1. La reorganización empresarial, cuyo fin es conservar a las empresas que presentan incapacidad para pagar sus deudas en el plazo pactado.
2. La liquidación de la empresa, que se da en los casos en los que la empresa definitivamente no es financieramente viable.

Es importante mencionar que, como medida transitoria debido a los efectos del Covid-19 (por los siguientes dos años), el Gobierno Colombiano expidió el Decreto 560 de 2020. Este tiene como fin que las empresas que se hayan visto afectadas por la Covid-19, puedan realizar el trámite de reorganización empresarial de manera expedita.

Ahora bien, a través del Decreto 560 se introdujo reformas temporarias a la legislación concursal ordinaria y se dividió las mismas en 4 grandes temas: (i) Negociaciones expeditas (cuyo paradigma parece haber sido seguido por nuestro país al incorporar el Decreto Legislativo N° 1511 mediante la creación del “Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal - PARC”), (ii) Mecanismos de alivio financiero y reactivación, (iii) Beneficios tributarios y (iv) Suspensión de normas (Mastrovincenzo, 2020).

Posteriormente, el gobierno colombiano dictó el Decreto Ley No. 772, del 3 de junio de 2020, también con modificaciones temporarias con vigencia por 2 años, cuyo cuerpo normativo hace énfasis en procesos de insolvencia en especial de las micros y pequeñas empresas cuyos activos sean inferiores o iguales a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El proceso recientemente instituido es el siguiente: El Juez de Concurso dará traslado de la propuesta y el contrato por el término de cinco (05) días. Esta propuesta deberá ser aprobada por la mayoría de los acreedores con vocación de

pago. En caso de guardar silencio, se entenderá que el acreedor respectivo vota positivamente la propuesta. El contrato de fiducia y sus cláusulas no son de responsabilidad del Juez del Concurso, sin embargo, por solicitud de cualquier acreedor, éste podrá, antes de su aprobación, requerir ajustes en las cláusulas que no correspondan a la finalidad de adjudicación como mecanismo de pago y la administración razonable de los activos, o aprobarlo sujeto a la realización de los ajustes que considere necesarios. Para estos efectos, el precio de base no será inferior al setenta por ciento (70%) del avalúo y, de no lograrse la venta, el precio base para un segundo remate será el cincuenta por ciento (50%) del avalúo (Mastrovincenzo, 2020).

Por otro lado, y bajo el Título II “Procesos de reorganización abreviado y proceso de liquidación judicial Simplificado” se diseña un trámite abreviadísimo, -Fast Track- que le permite al deudor una alternativa de reorganización de sus pasivos, sin agotar la reorganización concursal clásica colombiana, que dura 20 meses en promedio. Este proceso está planificado para tener una duración de 3 meses y puede tramitarse en simultáneo a aquel esquema clásico (Mastrovincenzo, 2020).

La Ley de Reorganización Empresarial busca que las empresas viables financieramente continúen operando, de manera que sea posible salvaguardarla como unidad económica y fuente generadora de empleo. Esto se logra a través de una reorganización financiera y administrativa de la empresa deudora, para lo que requiere el apoyo de sus acreedores.

Por lo anterior, podemos entender a la Ley No. 1116 como un mecanismo de alivio para las empresas que les permite hacer una reestructuración de sus pasivos, con el fin de saldar las deudas con sus acreedores. Es decir, acogerse a la Ley de insolvencia no significa que un acreedor pierda su dinero, pues el objetivo de este proceso es que se logre el pago a los acreedores.

La norma en mención establece que los acreedores y el deudor se encuentran en la capacidad de suscribir un acuerdo extrajudicial que permita llevar adelante la reestructuración de los pagos solicitando al Juez competente su aprobación. El juez, al momento de evaluar el pedido de validación judicial, debe de analizar si en este se consideran los porcentajes de votos requeridos por la ley, si existe constancia que las negociaciones han tenido publicidad y apertura suficiente frente a todos los acreedores, si se otorgan los mismos derechos a todos los acreedores

de la misma clase, si no se incluyen cláusulas ilegales o abusivas y si se cumplen con todos los preceptos legales.

Finalmente, si como resultado el juez de concurso autoriza el acuerdo, éste tendrá los mismos efectos que un acuerdo de reorganización logrado a través del proceso concursal regular.

2.3.3.3.Argentina

La Ley de Concursos y Quiebras –Ley No. 24.522- establece tres procedimientos de insolvencia: el concurso preventivo, el acuerdo preventivo extrajudicial y la quiebra.

La figura más cercana al “pre-pack” es el acuerdo preventivo extrajudicial que busca reestructurar los pasivos del deudor. Cabe resaltar que este acuerdo puede ser otorgado a través de un documento suscrito entre privados o a través de un documento público. Cuando un deudor se encuentra en una situación de cesación de pagos o dificultades económicas o financieras de carácter general puede celebrar un acuerdo con sus acreedores y someterlo a homologación judicial mediante el procedimiento de acuerdo preventivo extrajudicial.

El acuerdo preventivo extrajudicial fue incorporado a la Ley de Concursos y Quiebras a través de la Ley N. 25.589. Mediante éste los acreedores y el deudor llegan a un acuerdo para la reestructuración de los pasivos del deudor (Ley 25.589, 2002).

Los requisitos para homologar judicialmente este acuerdo son: (i) obtener la mayoría absoluta de votos de los acreedores quirografarios que, además, representen por lo menos dos tercios (2/3) del total de créditos quirografarios; (ii) presentar un estado de activos y pasivos del deudor; (iii) presentar una lista de acreedores que indique el domicilio de cada acreedor, el monto del crédito, el origen, los vencimientos, los codeudores/fiadores/terceros obligados o responsables y que esté certificada por un contador; (iv) una lista de procesos administrativos y juicios en los que esté involucrado el deudor; (v) una lista de los libros contables o de comercio que lleve el deudor; e (vi) indicar el monto de capital que representan los acreedores firmantes y el porcentaje que representan respecto al total de acreedores registrados (Ley 25.589, 2002).

Desde que se presenta la solicitud de homologación ante la corte quedan suspendidas todas las acciones de contenido patrimonial contra el deudor (Ley 25.589, 2002).

Una vez que el acuerdo preventivo extrajudicial ha sido homologado judicialmente, éste se vuelve vinculante para la totalidad de acreedores quirografarios, incluso para los que no hayan participado en la aprobación del acuerdo y los que hayan votado en contra de su aprobación (Ley 25.589, 2002).

2.4.Propuesta de creación de un Fast Track y Pre-Pack PARC 2.0 en el Perú

2.4.1. Antecedente: Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal PARC

La pandemia mundial ocasionada por el Covid-19 generó que muchas empresas y negocios se vieran forzados a cerrar temporalmente mientras estuvo en vigencia la cuarentena total en el Perú. Si bien algunas empresas y negocios pudieron seguir funcionando conforme se fue levantando la cuarentena, no es menos cierto que el impacto ocasionado por la reducción de sus ventas en los meses pasados o por la paralización total de funciones había generado un forado en sus estados financieros que genero un quiebre en la cadena de pagos para con sus trabajadores y proveedores.

Ahora bien, para hacer frente a esta situación, el 11 de mayo de 2020, el Poder Ejecutivo, mediante Decreto Legislativo No. 1511, creó el Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal – PARC. Este procedimiento concursal, distinto a los regulados por la ley de la materia (Procedimiento Concursal Ordinario y Procedimiento Concursal Preventivo), buscó caracterizarse por su celeridad y por llevarse adelante a través de medios tecnológicos, considerándose en adelante como un procedimiento administrativo electrónico. El Indecopi habilitó una mesa de partes virtual para la presentación de documentos (solicitud de acogimiento, reconocimiento de créditos, recursos, etc). Además, las notificaciones dentro del procedimiento se efectuaron de manera electrónica al correo electrónico que las partes proporcionaron.

Sin embargo, no fue sino hasta el 08 de junio de 2020 que el PARC entró en vigencia al dictarse su Reglamento a través del Decreto Supremo No. 102-2020-

PCM. El PARC se ideó como un procedimiento concursal de carácter voluntario, preventivo, temporal y extraordinario al cual se pudieron acoger las personas jurídicas que desarrollaban actividad empresarial y las asociaciones civiles que contaban con una buena calificación crediticia y cuya situación de crisis había sido generada por las consecuencias financieras del Covid-19, tramitándose ante la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi.

Sin duda alguna, los umbrales impuestos para el acceso al procedimiento corresponden a su naturaleza voluntaria, pues en una situación de precrisis es el deudor el único legitimado para decidir si precavidamente se incorpora a un procedimiento concursal. Conforme ha sido señalado anteriormente, al PARC solo pueden acogerse aquellas empresas que no se encuentren en una situación de insolvencia patrimonial (tener pérdidas acumuladas, deducidas las reservas, superiores al tercio del capital social pagado) que califique para incorporarse a un concurso ordinario regulado en la LGSC (De la Puente; Barrón, 2020).

Es de destacar que, ni la ley PARC ni su reglamento imponen el segundo requisito sobre no cesación de pagos que se exige para que un deudor se acoja a un concurso preventivo (es decir, que sus obligaciones vencidas e impagas por más de treinta días no superen el tercio del total de sus obligaciones), dicha exigencia es suplida por el requisito de tener una calificación normal o con problemas potenciales; es decir, el retraso máximo que el deudor puede tener con las entidades del sistema financiero es de 89 días calendario. Adicionalmente a esto, el reglamento del PARC exige que el deudor sustente mediante un resumen ejecutivo que el origen de su situación se debe al impacto generado por la COVID-19 (De la Puente; Barrón, 2020).

Al respecto, con la publicación del acogimiento al PARC en el boletín concursal, se generan:

- i) La suspensión de la exigibilidad de las obligaciones de las entidades calificadas; y,
- ii) El marco de protección legal del patrimonio.

Estos efectos tienen el carácter de temporales y permanecen hasta la aprobación o desaprobación del Plan de Refinanciación Empresarial (PRE) a cargo de la junta de acreedores.

2.4.1.1.Modalidad y Vigencia

Al respecto, el PARC únicamente podía ser solicitado e iniciado por las entidades calificadas, pudiendo ser estas asociaciones, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. No obstante, por el contrario, no se encontraban comprendidas dentro del ámbito de aplicación las personas naturales, las sociedades conyugales o sucesiones indivisas, las entidades supervisadas por SBS y la SMV y los patrimonios autónomos (fideicomisos). La vigencia del PARC inició el 08 de junio de 2020 y expiró el 31 de diciembre de 2020.

2.4.1.2.Condiciones que tuvo el PARC

En cuanto a cuándo se puede iniciar el procedimiento, el Artículo 5 del Reglamento del PARC estableció cinco requisitos: (i) estar clasificada en el Sistema Financiero, en la categoría de “Normal” o “Con Problemas Potenciales”; (ii) no encontrarse sometida a un procedimiento concursal; (iii) no tener pérdidas acumuladas, deducidas las reservas, cuyo importe sea mayor al tercio del capital social pagado; (iv) no encontrarse en los supuestos de disolución establecidos en el artículo 407 de la Ley General de Sociedades; y, (v) que el origen de la crisis se deba al impacto del COVID-19.

2.4.1.3.Silencio Administrativo

Son procedimientos administrativos de evaluación previa y sujetos al silencio administrativo negativo los siguientes:

- (i) Solicitud de acogimiento al PARC;
- (ii) Solicitudes de reconocimiento de créditos;
- (iii) Recursos; e,
- (iv) Impugnaciones al Plan de Refinanciación Empresarial (“PRE”).

2.4.1.4.Solicitud para acogerse al PARC

Para acogerse al PARC, la Entidad Calificada debía cumplir con presentar la siguiente documentación:

- (i) Resumen ejecutivo explicando que el origen de la crisis fue debido a la COVID-19;
- (ii) Copia digitalizada de la comunicación donde se informa al órgano competente de la sociedad la decisión de someterse al PARC;
- (iii) Datos del representante legal, poderes, correo electrónico y número telefónico;
- (iv) Reporte digitalizado de la central de riesgos;
- (v) Copias digitalizadas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo al cierre de 2019 y otro con un cierre mensual no mayor a dos meses previos a la solicitud de acogimiento;
- (vi) Relación de obligaciones; y,
- (vii) Declaración jurada con alcances complementarios a los aspectos previos.

Finalmente, el Indecopi contaba con un plazo de cinco días hábiles para verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, en cuyo caso correspondía emitir la resolución correspondiente de inicio de concurso, disponiendo la publicación en el Boletín Concursal en un plazo no mayor de cinco días hábiles.

2.4.1.5.Reconocimiento de créditos en el PARC

Para el reconocimiento de sus créditos, los acreedores debían de presentar su solicitud de reconocimiento de créditos dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del inicio de concurso por parte del Indecopi en el Boletín Concursal, vencido el plazo se declara improcedente cualquier otra solicitud.

En cuanto a los créditos laborales (remuneraciones y beneficios sociales), estos gozan del primer orden de preferencia, ello de la mano con el reconocimiento constitucional que se les otorga y de acuerdo al tratamiento otorgado en la normativa concursal. Asimismo, dentro de los créditos laborales también se

incluyen el pago de los aportes al Sistema Privado de Pensiones o a los regímenes previsionales administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Además, el tratamiento de los créditos laborales en el PARC no permite que sean pasibles de reconocimiento por la comisión; sin embargo, estos no quedan al margen del procedimiento concursal, sino que son las propias entidades calificadas quienes se encargaban de incluirlos en el cronograma de pagos del PRE.

Del mismo modo, los créditos derivados de una relación de consumo han sido eximidos de la etapa de reconocimiento de créditos, disponiéndose que su incorporación se haga de manera directa en el PRE. De considerarlo conveniente, el INDECOPI a través de su Sistema de Atención a los Ciudadanos (SAC) puede empadronar a los acreedores cuyos créditos provengan de una relación de consumo con la Entidad Calificada y entregar el padrón a la Secretaría Técnica de la Comisión, para que esta lo remita electrónicamente a la Entidad Calificada, a fin que esta considere a dichos acreedores en el PRE, según los términos establecidos en el Reglamento.

Al respecto, el Artículo 10° del Decreto Legislativo No. 1511 –Ley que crea el PARC- dispone que “de los fondos o recursos que se destinen al año para el pago de los créditos, por lo menos un 40% se asigna en partes iguales al pago de obligaciones laborales adeudadas a los trabajadores (...) y un 10% se asigna en partes iguales al pago de obligaciones de acreedores titulares de créditos derivados de una relación de consumo con la Entidad Calificada”.

Se considera que, consideramos que fue acertado incluir el reconocimiento de los créditos laborales y de consumo directamente en el PRE, pues con ello se evita –de alguna manera- que el procedimiento se retrase con las pugnas y/o cuestionamientos que pudiesen existir durante la etapa de reconocimiento en caso hayan tenido el tratamiento común para su reconocimiento.

Por otro lado, cabe mencionar que los créditos contingentes no son materia de reconocimiento; no obstante, en caso se levante la contingencia, estos pueden ser incluidos luego de aprobado el PRE en el cronograma de pagos según el orden de agrupación de acreedores de acuerdo a lo previsto en el PRE, tal como lo prevé el inciso 1 del artículo 10 del Decreto Legislativo No. 1511.

2.4.1.6. Junta de Acreedores en el PARC

De acuerdo con el Artículo 9 del Decreto Legislativo No. 1511, la Junta de Acreedores será enteramente virtual y grabada electrónicamente, en la que debía de participar un Notario Público, y cuyo único objetivo sería el de aprobar o desaprobar el Plan de Refinanciación Empresarial (PRE). La Junta de Acreedores se convoca dentro de los veinte (20) días hábiles de notificadas las resoluciones con la determinación de los créditos, y se realiza con posterioridad a los quince días hábiles de publicada la convocatoria.

Por otro lado, la Junta de Acreedores no sustituye a la Junta de Accionistas, Socios o equivalente de la Entidad Calificada, la cual sigue en funciones durante el PARC. En ese orden, la instalación de la Junta de Acreedores en ningún caso implica un desapoderamiento de la administración de la entidad calificada, ni la facultad de realizar un cambio en la administración de la Entidad; ello con el fin de hacer más atractivo el procedimiento para las empresas.

Además, la Junta de Acreedores se convocaba para fecha única y requería de la participación remota de acreedores con créditos reconocidos que representen más del cincuenta por ciento (50%) del total de los referidos créditos. Para la aprobación del PRE se requería del voto favorable de más del 50% del total de los créditos reconocidos.

En suma, los acreedores laborales y vinculados no participan en la conformación del quórum de la Junta de Acreedores, no siendo considerados en el quórum de instalación y careciendo de derecho de voto.

2.4.1.7. Plan de Refinanciación Empresarial – PRE

Respecto del Plan de Refinanciación Empresarial, se debe de precisar que posee carácter vinculante tanto para la entidad calificada como para sus acreedores, por lo que resulta de estricto cumplimiento. En efecto, el PRE servirá como herramienta para que la entidad calificada obtenga el refinanciamiento de sus obligaciones económicas de la mano con sus acreedores. Por otro lado, si un acreedor o un grupo de acreedores no solicitan el reconocimiento de sus créditos en el plazo previsto, el PRE les seguirá siendo obligatorio. La aprobación o desaprobación del PRE configuran la culminación del PARC sin necesidad de pronunciamiento adicional por parte del INDECOPI. Para tales efectos, sin mayor

trámite, el INDECOPI emite la respectiva constancia digital donde conste que la Junta de Acreedores aprobó o desaprobó el PRE, para su posterior inscripción en la Partida Registral del Registro de Personas Jurídicas de la entidad calificada.

En definitiva, el PRE podrá ser objeto de impugnaciones por el deudor o por acreedores que representen por lo menos el 10% de los créditos reconocidos, pudiendo ser también objeto de nulidad de oficio, en caso corresponda de acuerdo a ley.

2.4.2. Propuesta Nuevo Fast Track y Pre-Pack PARC 2.0

Al 31 de diciembre de 2020, fecha límite para acogerse al PARC, se presentaron dieciocho (18) solicitudes, de las cuales seis (6) solicitudes fueron admitidas a trámite. El detalle de las solicitudes presentadas, el sentido del pronunciamiento de la Comisión de Procedimientos Concursales y el estado de los procedimientos es el siguiente:

	Expediente	Solicitante	Fecha de Solicitud	Estado de la solicitud	Publicac. Boletín Concursal	Etapas
1.	001-2020/CCO-PARC	Agroindpex S.A.C.	07/07/20	Improcedente		
2.	002-2020/CCO-PARC	Corporación Logística Maquinarias del Perú S.A.C.	14/08/20	Admitida a trámite	28/08/20	Convocatoria a Junta de Acreedores (*)
3.	003-2020/CCO-PARC	Minera Mapsa S.A.	09/09/20	Inadmisible		
4.	004-2020/CCO-PARC	Core Andina Group S.A.C.	25/09/20	Inadmisible		
5.	005-2020/CCO-PARC	Full Oils Petro S.A.C.	30/09/20	Inadmisible		
6.	006-2020/CCO-PARC	Minera Mapsa S.A.	02/10/20	Inadmisible		
7.	007-2020/CCO-PARC	Full Oils Petro S.A.C.	16/10/20	Inadmisible		
8.	008-2020/CCO-PARC	Minera Mapsa S.A.	26/10/20	Improcedente		
9.	009-2020/CCO-PARC	Minera Mapsa S.A.	02/11/20	Improcedente		
10.	010-2020/CCO-PARC	Importaciones A & V S.A.C.	04/11/20	Admitida a trámite	16/11/20	Convocatoria a Junta de Acreedores (**)
11.	011-2020/CCO-PARC	Minera Mapsa S.A.	10/11/20	Improcedente		
12.	012-2020/CCO-PARC	Minera Mapsa S.A.	16/11/20	Improcedente		
13.	013-2020/CCO-PARC	Inversiones Romero Hermanos S.R.L.	23/11/20	Inadmisible		
14.	014-2020/CCO-PARC	Distribuidora Rio San E.I.R.L.	24/11/20	Inadmisible		
15.	015-2020/CCO-PARC	Delcorp Holding S.A.C.	16/12/20	Admitida a trámite	05/01/21	Reconocimiento de créditos
16.	016-2020/CCO-PARC	Core Andina Group S.A.C.	30/12/20	Admitida a trámite	15/01/21	Reconocimiento de créditos
17.	017-2020/CCO-PARC	Carrusel Representaciones S.A.C.	30/12/20	Admitida a trámite	15/01/21	Reconocimiento de créditos

18.	018-2020/CCO-PARC	Reencauchadora y Vulcanizadora Gigante S.R.L.	30/12/20	Admitida a trámite	15/01/21	Reconocimiento de créditos
-----	-------------------	---	----------	-----------------------	----------	-------------------------------

En efecto, Se declararon inadmisibles siete (07) solicitudes de inicio de PARC debido a que no cumplieron con los requisitos legales establecidos en el artículo 6.1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1511, tales como la presentación de la copia digitalizada de la constancia o reporte emitido por una central de riesgo, con una antigüedad no mayor a dos meses a la fecha de presentación de la solicitud, en la que se verifique que mantiene la categoría de “Normal” o “Con Problemas Potenciales; así como la presentación de la copia digitalizada del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, con sus notas respectivas, al cierre del año 2019 y de un cierre mensual con una antigüedad no mayor de dos meses a la fecha de presentación de la solicitud, entre otros documentos.

Asimismo, se declararon improcedentes cinco (5) solicitudes de inicio de PARC debido a que no cumplieron con las condiciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1511, toda vez que las Entidades Calificadas se encontraban en el supuesto previsto en el artículo 24.1 b) de la Ley General del Sistema Concursal, es decir tenían pérdidas superiores al tercio de su capital social pagado. Cabe precisar que todas las solicitudes fueron elevadas y resueltas dentro del plazo previsto en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1511.

Como se puede apreciar, el PARC no surtió el efecto deseado al no haber sido lo suficientemente atractivo para las empresas con problemas financieros a causa de la Covid-19. En ese sentido, se considera que el PARC –como ha sido legislado- ha fracasado en su intento de reestructurar empresas a fin de evitar la quiebra de estas y la ruptura de la cadena de pagos. En efecto, el PARC no ha servido como instrumento de pacificación entre el deudor con sus acreedores, pues como se observa, las empresas han preferido evitar participar del procedimiento haciendo uso de otros programas como Reactiva Perú.

Al respecto, es evidente que calificar al Programa Reactiva Perú resultaba desde un inicio menos engorroso que acceder al PARC, esto se evidenciaba por la cantidad de requisitos (aproximadamente 11) de este último y la poca predictibilidad que el mismo procedimiento vislumbraba. En vista de lo anterior, era de esperarse que las empresas con problemas de liquidez adopten el programa Reactiva Perú como una opción temporal para menguar su falta de liquidez. Ello debido a que es más rápida la posible admisibilidad de acceder a este crédito, en comparación a acudir a un trámite como el PARC.

Sin perjuicio de lo señalado, no se puede obviar que el PARC fue diseñado como un procedimiento Fast Track cuyo fin primordial es la reestructuración financiera de la empresa y hacer frente a situaciones de insolvencia. Es decir, situaciones donde la afectación del patrimonio es de tal magnitud, que el deudor no puede afrontar las deudas que mantiene con sus acreedores. Por otro lado, programas como Reactiva Perú buscan inyectar liquidez a las empresas, lo cual implica que estas no deben de mantener niveles de insolvencia altos para acceder a esta garantía.

Siguiendo esa misma línea, pese a la existencia de mecanismos de financiación otorgados por el Estado a favor de las empresas afectadas por la Covid-19, existe una imperiosa necesidad de otorgar un respaldo financiero que pueda ayudar en la insolvencia y evitar la iliquidez de las empresas. No obstante, si las empresas no conjugan un plan ordenado de pagos, los problemas de liquidez regresarán en un futuro inmediato. En ese orden, se considera que el PARC es un mecanismo complementario a los programas de financiamiento empresarial garantizados por el Estado y no necesariamente excluyente, como ocurrió durante la vigencia del PARC.

En efecto, las empresas deben de invertir la liquidez obtenida en virtud al préstamo otorgado por el Estado en capital de trabajo, buscando mantener el negocio en marcha con el fin de cumplir con sus acreedores y evitar la ruptura de la cadena de pagos. Si bien, aún el PARC no se ha utilizado como fuente de refinanciamiento, consideramos que ello en futuro cercano terminará sucediendo. Principalmente por la necesidad de repagar las deudas adquiridas que no pudieron ser cubiertas con los fondos provenientes del Programa Reactiva Perú, por lo que consideramos que el PARC deberá de continuar existiendo con las mejoras prudenciales que precisaremos más adelante.

2.4.2.1.¿Es necesario un nuevo PARC 2.0?

El procedimiento creado para los efectos de enfrentar la crisis financiera de las empresas frente al Covid-19 es bueno, pero requiere necesariamente de algunos ajustes que lo vuelvan más eficiente con la finalidad de pacificar el conflicto entre el deudor y sus acreedores. En ese sentido, dando respuesta a la pregunta, consideramos que si resulta necesario contar con un nuevo PARC.

Se considera que, en cuanto al acceso, es de suma importancia que se elimine toda restricción para las personas jurídicas, personas naturales, sociedades conyugales y sucesiones indivisas que se encuentren afectadas económicamente por el impacto del Covid-19. En ese orden, deben poder acceder al procedimiento todas las personas jurídicas, inscritas o no, que de una u otra manera vean en el procedimiento una vía de alivio financiero para con sus acreedores. La eliminación de cualquier restricción incluye también a aquellas personas naturales y/o jurídicas que hayan recibido otros programas de apoyo del Estado.

En ese orden, consideramos que el procedimiento debe de caracterizarse por ser versátil, permitiendo inclusive que el deudor en conjunto con los acreedores lleguen a acuerdos Pre-Pack antes del inicio del procedimiento, los mismos que muy bien podrían ser aprobados por el Indecopi con su sola presentación ante la entidad.

La inexigibilidad de las obligaciones, la suspensión de cualquier proceso judicial o arbitral de cobro donde se hayan embargado o se encuentren en garantía bienes del deudor, o la ejecución del patrimonio del deudor por mecanismos legales, debe de operar inmediatamente una vez se declare el acogimiento por parte del deudor al procedimiento.

Para estos efectos, lo expresado en el párrafo anterior debe de operar con la sola presentación de la documentación requerida. Se trata de evolucionar el PARC anterior -de un procedimiento de evaluación previa con silencio negativo- a un procedimiento de aprobación automática, previa revisión por parte del órgano competente del cumplimiento de los requisitos exigidos por ley para el acogimiento, precisando la responsabilidad penal recae, respecto de la veracidad de la documentación presentada, en los representantes del solicitante. En ese

orden, la sola conformidad por parte del Indecopi respecto de los documentos recibidos debe de significar el acogimiento por parte del deudor al régimen concursal.

Bajo este nuevo paradigma, se obtendría la pronta protección del patrimonio del deudor con el inicio automático del concurso, quedando a la espera lo que finalmente decida la Junta de Acreedores sobre el futuro del concursado. En efecto, esto es lo terminaría haciendo más que atractivo optar por este mecanismo tanto para el deudor como para sus acreedores, a sabiendas que lo que ocurra en el concurso (reestructuración, liquidación, quiebra) dependerá de los acreedores y ya no del deudor.

Por otro lado, el nuevo PARC debe de considerar un reconocimiento de créditos expeditivo. Esto significa que tanto los acreedores como la autoridad administrativa deben de actuar con prontitud en dicha actividad. A criterio de los investigadores, el PARC acertó al no incluir a los créditos laborales en el concurso; en ese sentido, consideramos además que un nuevo PARC no debe de incluir en la etapa de reconocimiento a los créditos de origen laboral, previsional y tributario. Para dichos créditos de origen laboral, previsional y tributario no deberá ser necesario que se presente una solicitud de reconocimiento de créditos, debiendo incorporarse dichos créditos directamente dentro del concurso sobre la base de la declaración jurada del deudor.

En cuanto a los créditos de origen tributario, consideramos que la participación directa de la Sunat en el procedimiento concursal es innecesaria pues no tiene capacidad discrecional para decidir, únicamente debe acogerse a los mecanismos de cobro y garantizar el cumplimiento de la ley. Es importante recalcar que de ningún modo la deuda pública puede ser condonada, a diferencia de la deuda entre privados. Eliminar la participación de los acreedores laborales, previsionales y tributarios en el concurso generará agilidad en el mismo y no perjudicará a estos en lo más mínimo pues su único interés es el cobro de las deudas que pudieran tener.

Sobre este punto, se considera que es importante resaltar que los acreedores laborales y previsionales tienen preferencia de primer rango para el cobro y la Sunat cobra en cuarto rango en virtud del orden de preferencia², luego de los

² Artículo 42° de la Ley General del Sistema Concursal.

acreedores garantizados. En virtud de lo anterior, su participación en la Junta de Acreedores es innecesaria pues mayoritariamente su votación es por la reestructuración, único camino para permitir que la empresa continúe con sus operaciones y pueda pagar las acreencias.

Por otro lado, consideramos que no es menos cierto que, sobre la base de la experiencia, se ha podido observar que en algunos procedimientos concursales el concursado ha convenido con el/los acreedor(es) con mayor poder de decisión para intentar defraudar a los demás acreedores, mediante la estructuración de planes de pago con horizontes excesivos.

Siendo ello así, creemos que actuaría como un candado alentador, el otorgar a los créditos laborales, previsionales y tributarios un paraguas protector que impida que se puedan ver afectados injustamente por un intento de fraude en su contra.

En ese sentido, consideramos que, en caso los créditos laborales, previsionales y tributarios superen el 50% de la totalidad de la deuda reconocida, el plazo para estructurar el plan de pagos no podrá exceder de los 5 años para este tipo de créditos.

En cuanto a la instalación de la junta de acreedores, consideramos que para la toma de decisiones se deberá elevar al 66% la representación de los créditos reconocidos, que es el porcentaje exigido para todo concurso. De esta manera, se dota de legitimidad la decisión que se adopte en junta de acreedores, teniendo en consideración la exclusión de los acreedores laborales, previsionales y tributarios.

En esa línea, se ha asumido por parte de los investigadores una postura de espectadores de la problemática que acarreó la necesidad de que un Notario Público participe de manera remota en la Junta de Acreedores. En efecto, la participación de un Notario Público generó un incremento en los costos asociados al PARC y además muchos de ellos consideraron que no era posible brindar fe pública a través de juntas por medios electrónicos. Siendo ello así, resulta necesario que se reformule la necesidad de contar con un Notario Público toda vez que son las mismas concursadas quienes tienen que solventar el costo por la participación de un Notario en todas las convocatorias a Junta de Acreedores.

Para dicho efecto, sugerimos que en la Junta de Acreedores participe un fedatario nombrado por la Comisión que brinde fe de los actos que se desarrollan durante el desarrollo de la misma. Ello servirá para reducir costos al concursado y para agilizar el desarrollo del procedimiento.

Se estima que, los créditos vinculados deben participar del concurso y estos deben de ser declarados por el deudor de acuerdo a ley³. Contrariamente a lo previsto por el PARC, el crédito vinculado –siempre que no sea de carácter laboral o previsional- debe de encontrarse facultado de participar en la junta con derecho a voto, correspondiendo a la Comisión desarrollar su labor de verificación a los efectos de determinar si el crédito vinculado es tal o se trata de una simulación fraudulenta.

Asimismo, el mecanismo contemplado en la Ley General del Sistema Concursal⁴ resulta apropiado para el tratamiento de estos créditos cuando representen más del 50% de créditos reconocidos. Así, si superan el 50% del universo de los créditos, entonces forman una asamblea como acreedores reconocidos vinculados, donde votan en un sentido coincidente o no con la otra asamblea de acreedores no vinculados.

Se asume de igual modo que una vez que la empresa ha adquirido la calidad de concursada, es necesario que se designe a un Controller que coadyuve a la supervisión de los actos que realice la administración de la empresa concursada. Lo anterior no implica que la administración de la empresa por parte de los accionistas se elimine. Otra opción es que la supervisión de los actos de la administración se realice a través de un representante del Indecopi que tenga acceso a toda la información y pueda intervenir, tomando conocimiento y dando conformidad, en todas las operaciones de disposición patrimonial.

No se considera pertinente la necesidad de un Indecopi inquisitivo que pretenda intervenir en cada decisión que la Junta de Acreedores tome; no obstante, si consideramos necesario que ejerza un control posterior velando por la eliminación de algún posible fraude o simulación, del pago indebido de obligaciones y/o el incumplimiento de las condiciones legales del procedimiento concursal.

Contrariamente a lo dispuesto por el PARC, consideramos que se debe de abrir una segunda vía –distinta a la de reestructuración- donde el propio deudor y/o sus acreedores soliciten la disolución o liquidación del patrimonio del concursado. Frente a ese escenario, de concretarse la disolución y liquidación del concursado de acuerdo a ley, el liquidador debe de encontrarse empoderado lo suficientemente

³ Artículo 12° de la Ley General del Sistema Concursal.

⁴ Artículo 59° de la Ley General del Sistema Concursal.

como para poder disponer de los bienes del concursado –luego de cumplir con las formalidades del remate en caso nadie se los haya adjudicado- como mejor lo permita al mercado.

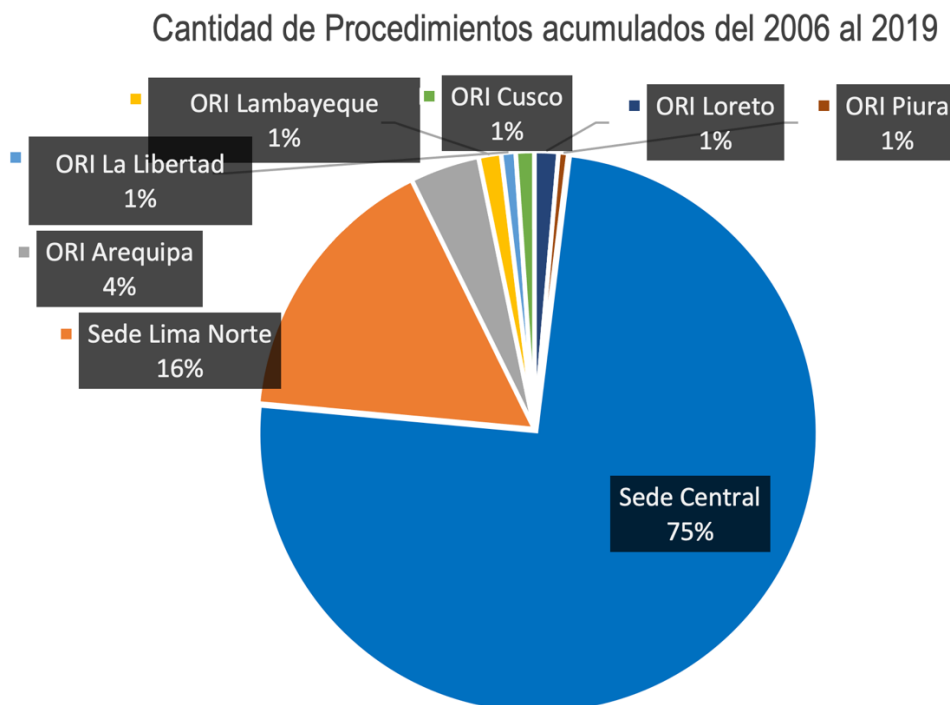
2.5. Información Estadística

Con la finalidad de ampliar la contextualización en la materia de estudio de nuestra tesis, analizaremos la información estadística disponible que obra en el sitio web del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – INDECOPI respecto a la Comisión de Procedimientos Concursales que a su vez se organiza su atención en Procedimiento Concursal Ordinario, Procedimiento Concursal Preventivo y Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal. La información disponible data desde el año 2006 hasta el año 2019, con quince años de información disponible, que nos permitirá conocer el comportamiento y la evolución que desarrolló los procedimientos concursales. Finalmente, para la información estadística del año 2020, se realizó una búsqueda específica al Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal para recoger información sobre cantidad de procedimientos solicitados, admitidos y concluidos.

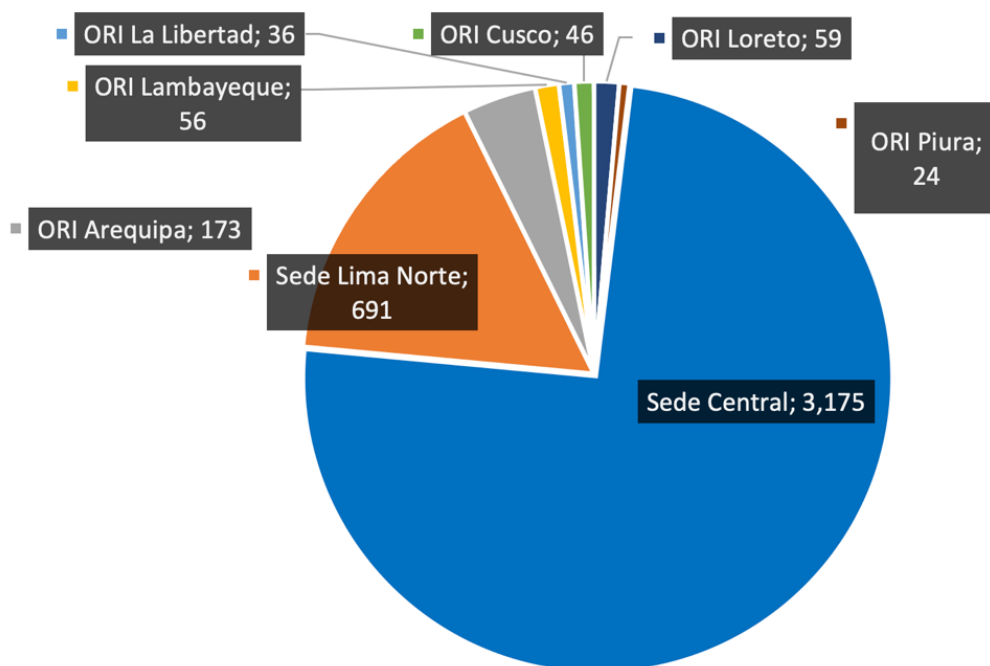
Para estos efectos, en la gráfica N° 01-A y gráfica N° 01-B corresponde a información acumulada desde el año 2006 al 2019 sobre las ocho sedes donde se dieron lugar a cuatro mil doscientos sesenta procedimientos concursales tales como: Sede Central – Lima con tres mil ciento setenta y cinco procedimientos iniciados que representan el setenta y cinco por ciento del total de casos registrados, Sede Lima Norte con seiscientos noventa y uno procedimientos iniciados que representan el dieciséis por ciento del total de casos registrados, Oficina Regional de Indecopi Arequipa con ciento setenta y tres procedimientos iniciados que representan el cuatro por ciento, Oficina Regional de Indecopi Lambayeque con cincuenta y seis procedimientos iniciados que representan el uno por ciento, Oficina Regional Indecopi La Libertad con treinta y seis procedimientos iniciados que representan el uno por ciento, Oficina Regional Indecopi Cusco con cuarenta y seis procedimientos que representan el uno por ciento, Oficina Regional Indecopi Loreto con cincuenta y nueve casos que representa el uno por ciento, Oficina Regional Indecopi Piura con veinticuatro

procedimientos que representan el uno por ciento del total de procedimientos registrados.

Gráfica N° 01-A



Gráfica N° 01-B



En la gráfica N° 02 vemos la evolución de los procedimientos iniciados mensualmente desde el año 2006 al año 2019. En base a la información disponible procesada, notamos que la proporción de los procedimientos iniciados en el año 2006 no tienen un comportamiento progresivo ascendente en comparación a los demás años, muy por el contrario se han reducido.

Gráfica N° 02



Sobre el comportamiento observado en la gráfica N° 02, ahora podemos apreciar en la gráfica N° 03 el mismo comportamiento, pero desde una vista

anualizada de los procedimientos iniciados. En el año 2006 se registran cuatrocientos cuarenta y uno procedimientos, para el año 2007 se registra trescientos setenta y nueve procedimientos, para el año 2008 se registra trescientos setenta y seis procedimientos, para el año 2009 se registra cuatrocientos dieciocho procedimientos, para el año 2010 se registra trescientos cincuenta y ocho procedimientos, para el año 2011 se registra quinientos once procedimientos, para el año 2012 se registra trescientos sesenta y tres procedimientos, para el año 2013 se registra cuatrocientos catorce procedimientos, para el año 2014 se registra cuatrocientos veintitrés procedimientos, para el año 2015 se registra doscientos noventa y uno procedimientos, para el año 2016 se registra ciento dieciséis procedimientos, para el año 2017 se registra sesenta y seis procedimientos, para el año 2018 se registra cincuenta y siete procedimientos, para el año 2019 se registra cuarenta y siete procedimientos.

Sin embargo, llama la atención que en el año 2011 hubo un incremento mayor en los procedimientos iniciados en comparación a los años anteriores y en comparación a los siguientes años, esta será analizada en los siguientes párrafos.

Grafica N° 03



En el párrafo anterior se resaltó que en el año 2011 se nota un incremento mayor a los años anteriores y que también es mayor a los siguientes años. Sobre la base de información estadística disponible, verificamos que a partir del año 2010 se da comienzo a una nueva oficina en la Sede Lima Norte con sesenta y cuatro procedimientos y, en el año 2011 se da comienzo a otras nuevas oficinas tales como la Oficina Regional Indecopi Arequipa con diecinueve nuevos procedimientos, la Oficina Regional Indecopi Lambayeque con veinticuatro

nuevos procedimientos, la Oficina Regional La Libertad con dieciocho nuevos procedimientos, la Oficina Regional Indecopi Cusco con tres nuevos procedimientos, La Oficina Regional Indecopi Loreto con seis nuevos procedimientos, la Oficina Regional Piura con veintitrés nuevos procedimientos, ver cuadro N° 01.

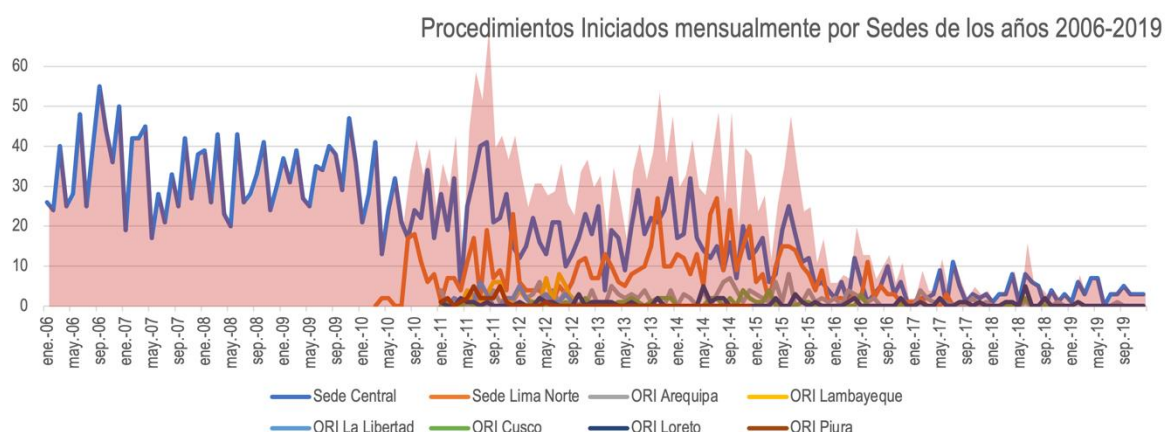
Cuadro N° 01

Año	Sede Central	Sede Lima Norte	ORI Arequipa	ORI Lambayeque	ORI La Libertad	ORI Cusco	ORI Loreto	ORI Piura	TOTAL
2006	441	0	0	0	0	0	0	0	441
2007	379	0	0	0	0	0	0	0	379
2008	376	0	0	0	0	0	0	0	376
2009	418	0	0	0	0	0	0	0	418
2010	294	64	0	0	0	0	0	0	358
2011	307	111	19	24	18	3	6	23	511
2012	201	65	31	32	18	6	9	1	363
2013	240	130	26	0	0	12	6	0	414
2014	189	178	34	0	0	12	10	0	423
2015	145	101	30	0	0	8	7	0	291
2016	56	36	16	0	0	3	5	0	116
2017	42	6	12	0	0	0	6	0	66
2018	43	0	3	0	0	2	9	0	57
2019	44	0	2	0	0	0	1	0	47

Ahora bien, con la descripción relacionada para el gráfico N° 03 y con la descripción relacionada para el cuadro N° 01 que tienen como base la información estadística disponible, se corrobora que el incremento de los procedimientos iniciados del año 2011 es por la apertura de Nuevas Oficinas Regionales Indecopi.

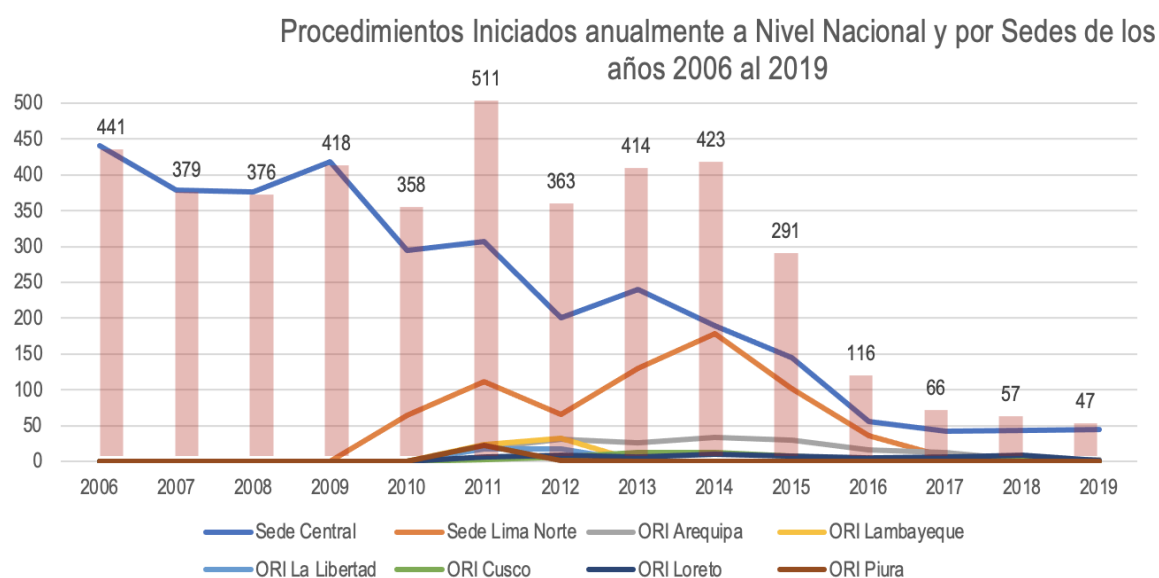
Nótese en la gráfica N° 04 los procedimientos iniciados mensualmente por sedes en los años 2006 al año 2019, la línea azul que corresponde única y exclusivamente a la Sede Central y la evolución de procedimientos iniciales es más notorio el descenso y, con relación a la Oficina Regional de Indecopi Lima Norte, Oficina Regional de Indecopi Arequipa, Oficina Regional de Indecopi Lambayeque, Oficina Regional de Indecopi La Libertad, Oficina Regional de Indecopi Cusco, Oficina Regional de Indecopi Loreto y la Oficina Regional de Indecopi Piura, tampoco presentan un incremento progresivo en los procedimientos pero que si refuerza los comentarios con relación al mayor incremento de casos en el año 2011.

Grafica N° 04



En la gráfica N° 05 se visualizan los movimientos de procedimientos iniciados anuales consolidados en contraste a los movimientos anuales de la oficina de la Sede Central Lima, Oficina Regional de Indecopi Lima Norte, Oficina Regional de Indecopi Arequipa, Oficina Regional de Indecopi Lambayeque, Oficina Regional de Indecopi La Libertad, Oficina Regional de Indecopi Cusco, Oficina Regional de Indecopi Loreto y la Oficina Regional de Indecopi Piura, comparando de esta manera el histórico de procedimientos.

Grafica N° 05

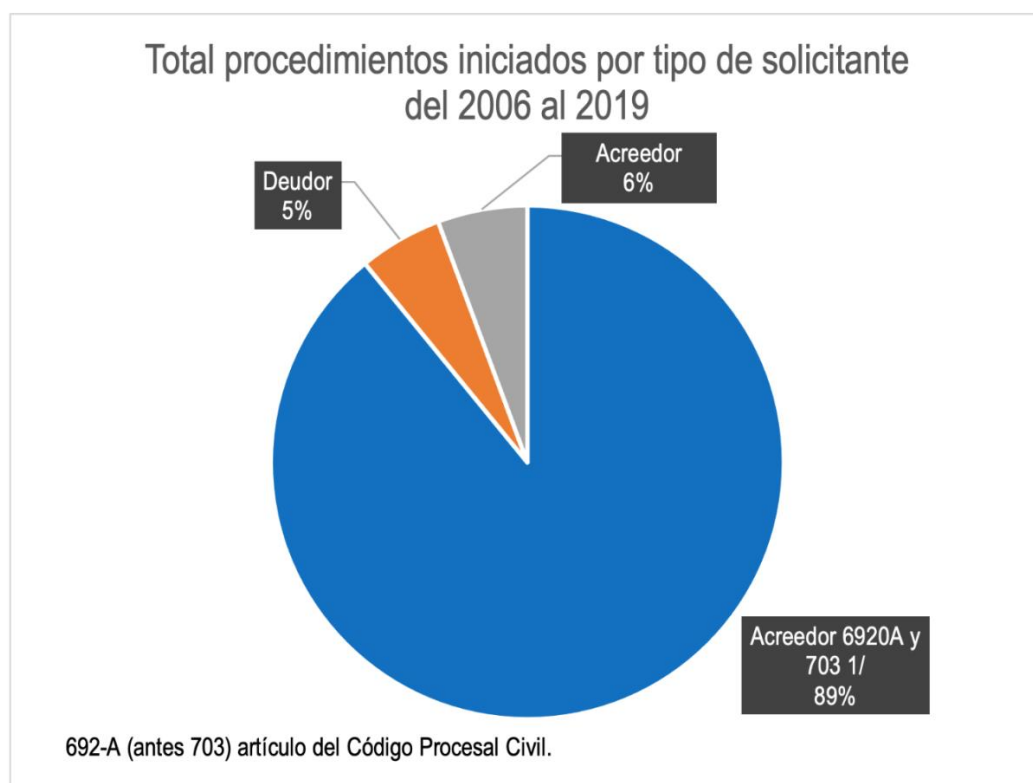


Los procedimientos iniciados se pueden clasificar por tipo de solicitante que son Deudor, Acreedor y Acreedor 692-A antes 703 del Código Procesal Civil. Si bien la Ley 30201 (deudores morosos) publicada el 28 de mayo de 2014 se modificó el referido artículo 692 – A, eliminando la liquidación por mandato

judicial; a la fecha se siguen recibiendo los procesos iniciados con anterioridad a la mencionada modificación legal.

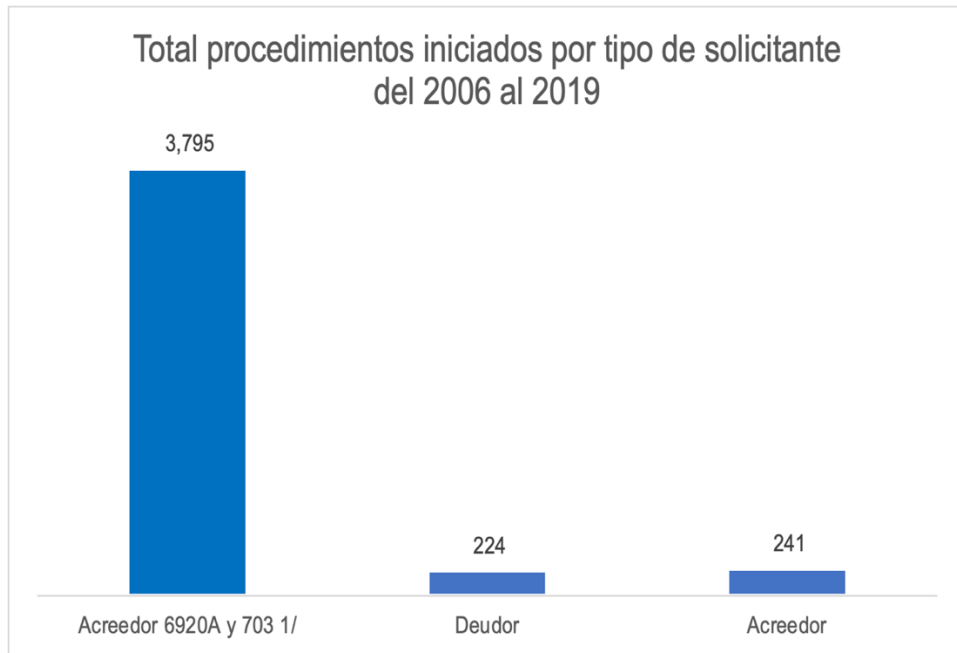
Nótese en la gráfica N° 06 que del total de procedimientos iniciados por tipos de solicitante desde el año 2006 al año 2019, el cinco por ciento corresponde a procedimientos solicitados por el deudor, el seis por ciento corresponde a procedimientos solicitados por el Acreedor y el ochenta y nueve por ciento corresponde a procedimientos solicitados por el Acreedor 602-A y 703.

Grafica N° 06



Nótese en la gráfica N° 07 que del total de procedimientos iniciados por tipos de solicitante desde el año 2006 al año 2019, doscientos veinticuatro casos corresponde a procedimientos solicitados por el deudor, doscientos cuarenta y un casos corresponde a procedimientos solicitados por el Acreedor y tres mil setecientos noventa y cinco casos corresponde a procedimientos solicitados por el Acreedor 602-A y 703.

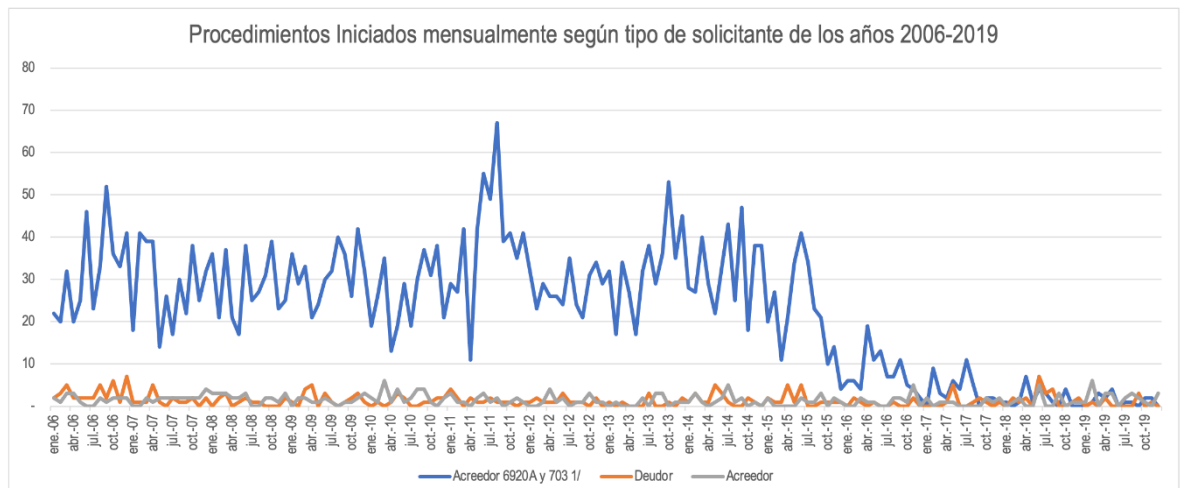
Grafica N° 07



692-A (antes 703) artículo del Código Procesal Civil.

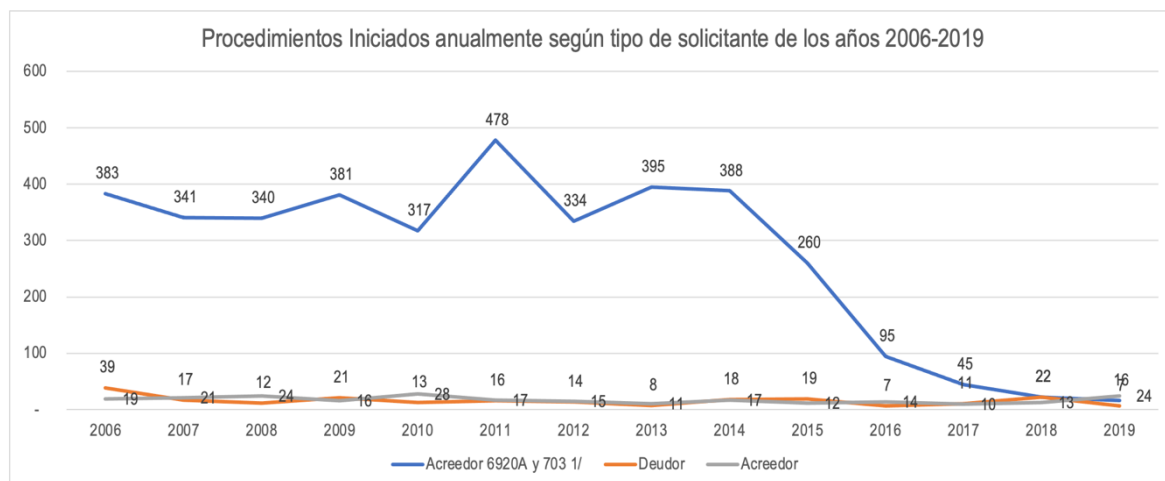
Nótese en la gráfica N° 08 los procedimientos iniciados mensualmente por tipo de solicitante en los años 2006 al año 2019, la línea azul que corresponde a procesos solicitados por Acreeedores en base al artículo 692 A y 703 del Código Procesal Civil, la línea color naranja corresponde a procedimientos solicitados por el Deudor, la línea color plomo corresponde a procesos solicitados por el Acreeedor.

Grafica N° 08



En la gráfica N° 09 visualizamos el comportamiento de los procedimientos iniciados anualmente según tipo de solicitante de los años 2006 al 2019. Esta a su vez refleja un descenso significativo en los procedimientos iniciados por Acreedores por el que inicialmente tenía mayor relevancia.

Grafica N° 09



Toda vez que se dé lugar a un supuesto de procedimiento iniciado ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, esta cursará el proceso regular para la conformación de la Junta de Acreedores en las cuales se adoptaran decisiones respecto del destino del deudor.

En la gráfica N° 10 visualizamos el histórico mensual de conformación de la Junta de Acreedores a partir del año 2006 al año 2019.

Grafico N° 10



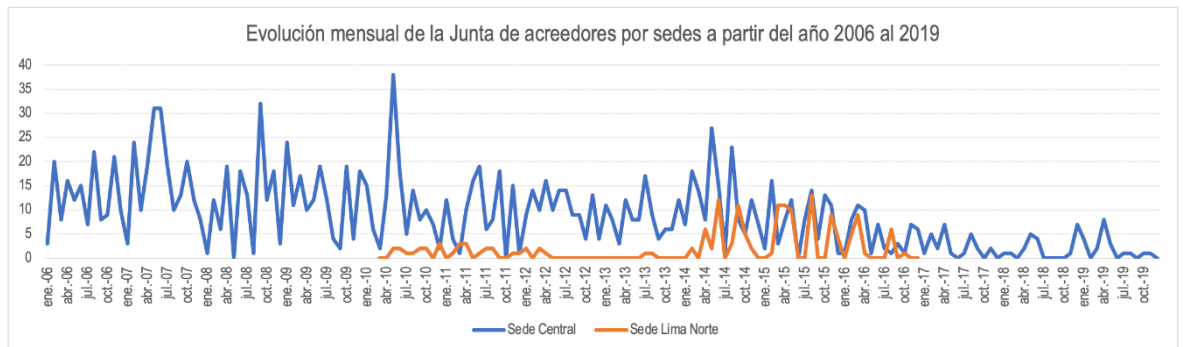
En el gráfico N° 11 se muestra el histórico anualizado de conformación de la Junta de acreedores. En el 2006 se conformaron ciento cincuenta y un Juntas de Acreedores, en el año 2007 se confirmaron doscientas Juntas de Acreedores, en el 2008 se confirmaron ciento treinta y cinco Juntas de Acreedores, en el año 2009 se conformaron ciento cincuenta y dos Juntas de Acreedores, en el año 2010 se conformaron ciento cincuenta y un Juntas de Acreedores, en el año 2011 se conformaron ciento veinticuatro Juntas de Acreedores, en el año 2012 se conformaron ciento treinta y un Juntas de Acreedores, en el año 2013 se conformaron ciento seis Juntas de Acreedores, en el año 2014 se conformaron ciento ochenta y ocho Juntas de Acreedores, en el año 2015 se conformaron ciento cincuenta y un Juntas de Acreedores, en el año 2016 se conformaron ochenta Juntas de Acreedores, en el año 2017 se conformaron veintiséis Juntas de Acreedores, en el año 2018 se conformaron veintiuno Juntas de Acreedores, en el año 2019 se conformaron veintiuno Juntas de Acreedores. Corroboramos la disminución de conformación de Junta de Acreedores en el periodo 2006 al 2019.

Gráfico N° 11



La revisión de la gráfica N° 11 muestra los valores consolidados compuestos por todas las Sedes y Oficinas Regionales de Indecopi. Ahora bien, en la gráfica N° 12 mostramos el histórico de la conformación mensual y en la gráfica N° 13 mostramos el histórico de la conformación anual de la Junta de Acreedores por Sedes y Oficinas Regionales de Indecopi. Sobre el particular nótese que solo se llegaron a conformar Junta de Acreedores en las Sede Central de Indecopi y en la Sede Lima Norte.

Gráfica N° 12

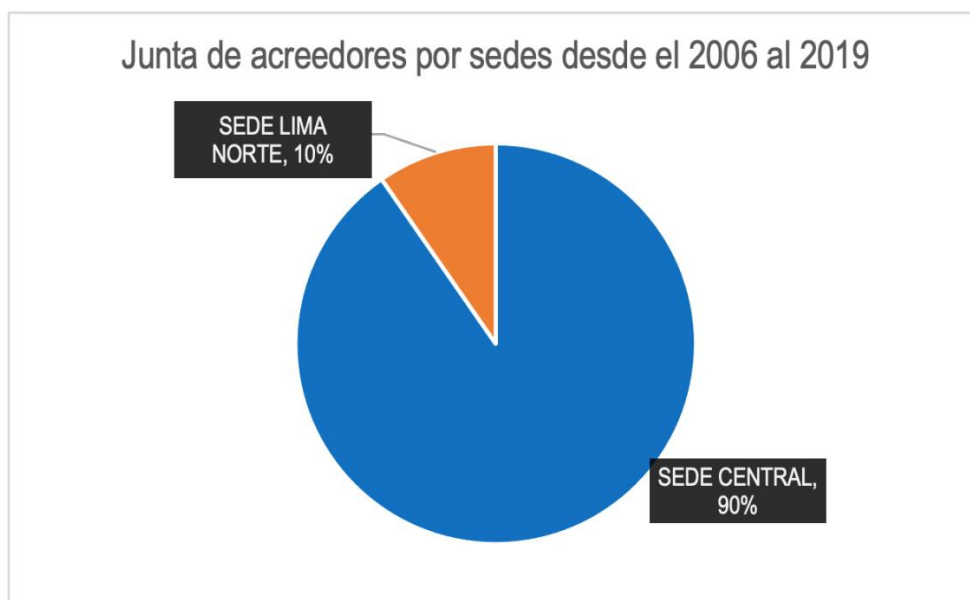


Gráfica N° 13

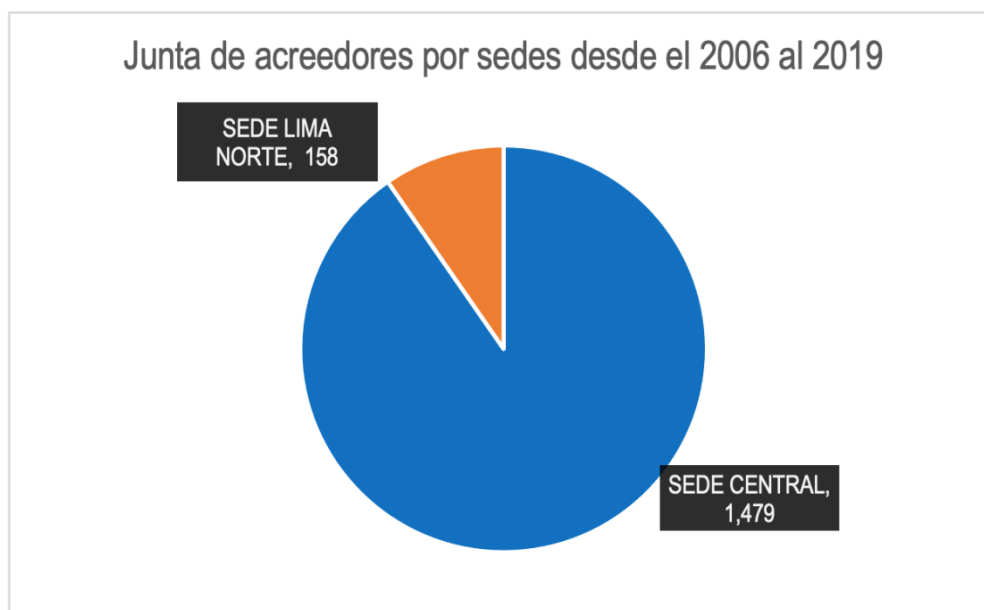


Nótese en la gráfica N° 14 y la gráfica N° 15 que la Sede Lima Norte de Indecopi representa el diez por ciento con ciento cincuenta y ocho Juntas de Acreedores conformadas entre el periodo 2006 al 2019 y la Sede Central de Indecopi representa el noventa por ciento con mil cuatrocientos setenta y nueve Juntas de Acreedores conformadas entre el periodo 2006 al 2019.

Gráfica N° 14



Grafica N° 15



Con la conformación de la Junta de Acreedores adoptan decisiones respecto al destino del patrimonio del deudor. Los tipos de destino para el patrimonio del deudor se clasifican en Reestructuración, Acuerdo Aprobado y Liquidación.

En la gráfica N° 16 nótese que el cuatro por ciento corresponde a Reestructuración como destino del patrimonio del deudor, menos del cero por ciento corresponde a Acuerdos Aprobados como destino del patrimonio del deudor y el noventa y cinco por ciento corresponde a Liquidación como destino del patrimonio del deudor.

Grafica N° 16



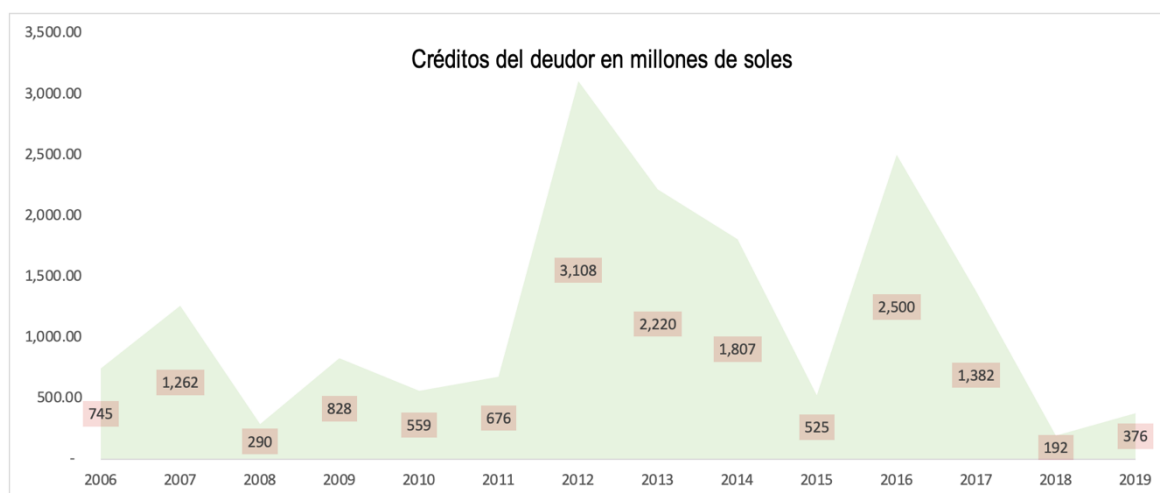
En la gráfica N° 17 nótese que son setenta y cuatro Juntas de Acreedores que decidirán por Reestructuración como destino del patrimonio del deudor, dos Juntas de Acreedores que decidirán por Acuerdos Aprobados como destino del patrimonio del deudor y mil quinientos sesenta y un Juntas de Acreedores que decidirán por Liquidación como destino del patrimonio del deudor.

Gráfica N° 17



Con el transcurso de los años, los procedimientos iniciados dieron lugar a tratar créditos valorizados en setecientos cuarenta y cinco millones de soles para el año 2006, un mil doscientos sesenta y dos millones de soles para el año 2007, doscientos noventa millones de soles para el año 2008, ochocientos veintiocho millones de soles para el año 2009, quinientos cincuenta y nueve millones de soles para el año 2010, seiscientos setenta y seis millones de soles para el año 2011, tres mil ciento ocho millones de soles para el año 2012, dos mil doscientos veinte millones de soles para el año 2013, mil ochocientos siete millones de soles para el año 2014, quinientos venticinco millones de soles para el año 2015, dos mil quinientos millones de soles para el año 2016, mil trescientos ochenta y dos millones de soles para el año 2017, cientos noventa y dos millones de soles para el año 2018, trescientos setenta y seis millones de soles para el año 2019. Son estos créditos que han sido reconocidos para la decisión del destino del patrimonio del deudor, ver gráfica N° 18.

Gráfica N° 18



Los créditos reconocidos del deudor se clasifican según el destino del patrimonio, al respecto en la gráfica N° 19, nótese estos créditos clasificados, siendo las más resaltante los créditos reconocidos que tendrán como destino del patrimonio a la Liquidación, en segundo lugar los créditos reconocidos que tendrán como destino del patrimonio la Reestructuración y en tercer lugar los créditos reconocidos que tendrán como destino del patrimonio un Acuerdo Aprobado, siendo este último registrado solo en los años 2017 con cuatrocientos cuarenta y un millones de soles y en el año 2019 con sesenta y dos mil millones de soles.

Gráfica N° 19



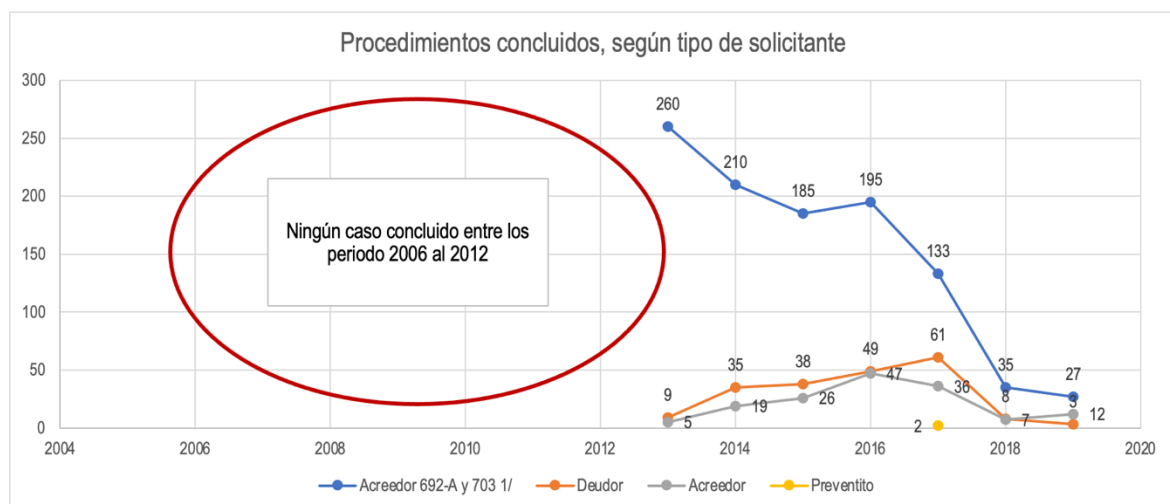
Ahora bien, recordando el histórico de procedimientos iniciados y tomando como base el año 2006 para analizar la evolución de los mismos, nótese en la gráfica N° 21 que del año 2006 al año 2007 se registra una variación de -14%, del año 2006 al año 2008 se registra una variación de -15%, del año 2006 al año 2009 se registra una variación de -5%, del año 2006 al año 2010 se registra una variación de -19%, del año 2006 al año 2011 se registra una variación de 16%, del año 2006 al año 2012 se registra una variación de -18%, del año 2006 al año 2013 se registra una variación de -6%, del año 2006 al año 2014 se registra una variación de -4%, del año 2006 al año 2015 se registra una variación de -34%, del año 2006 al año 2016 se registra una variación de -74%, del año 2006 al año 2017 se registra una variación de -85%, del año 2006 al año 2018 se registra una variación de -87%, del año 2006 al año 2019 se registra una variación de -89%, ver gráfica N° 20.

Gráfica N° 20



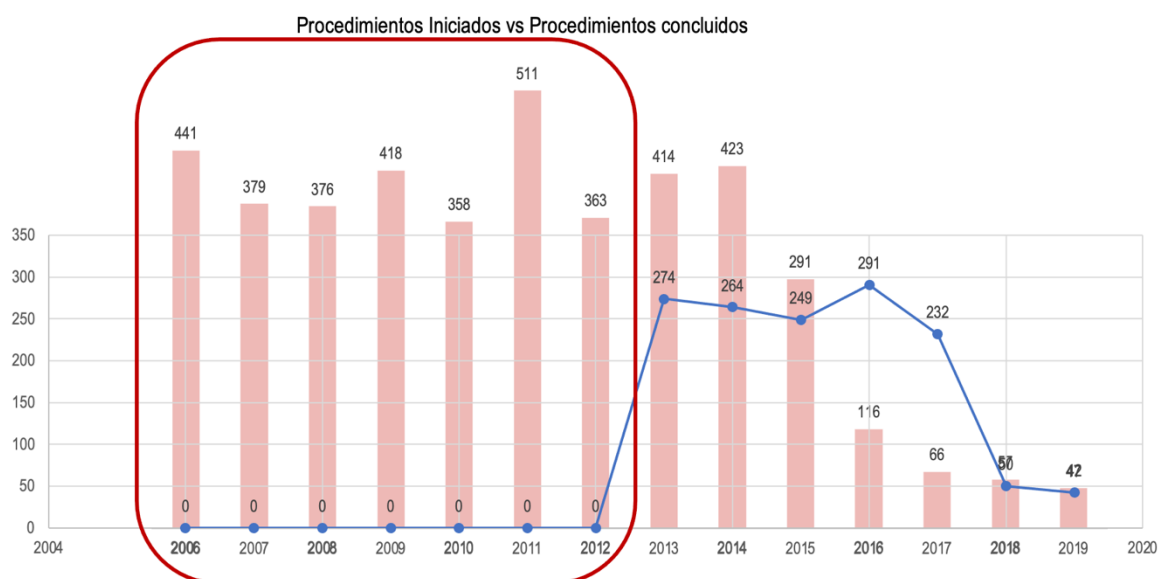
A partir del año 2006, información estadística disponible que obra en el sitio web del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, tal información permite efectuar un comparativo de los procedimientos iniciados con relación a los procedimientos concluidos. Sobre este particular se puede verificar que desde el año 2006 al año 2012 no se registran procedimientos concluidos, ver gráfica N° 21. Es a partir del año 2013 con mayor nivel de representación los procesos iniciados por los Acreedores 692-A y 703, en segundo nivel de representación los procesos iniciados por el Deudor, en tercer lugar de representación los procedimientos iniciados por el Acreedor y en último nivel con dos casos registrados procedimientos preventivos.

Gráfica N° 21



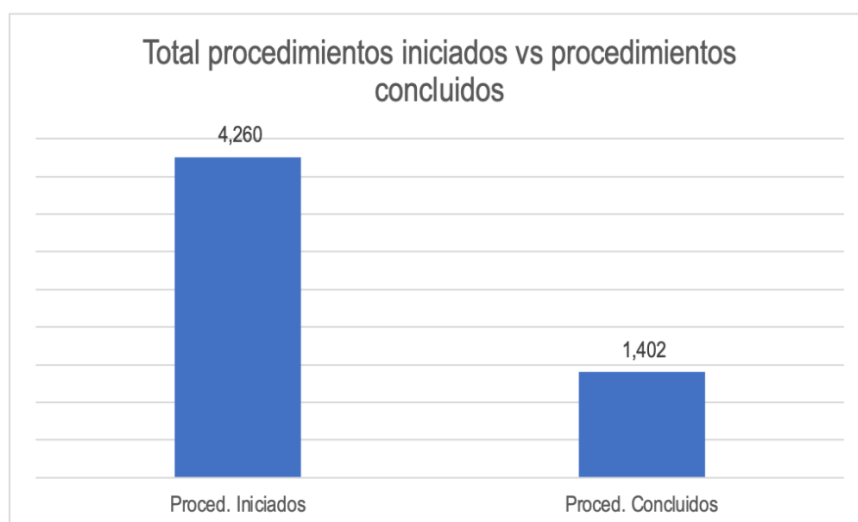
En ese sentido, son después de haber haberse registrado dos mil cuatrocientos diesiseis procedimientos iniciados que se componen con los valores registrados en el año 2006 de cuatrocientos cuarenta y uno procedimientos, para el año 2007 se registra trescientos setenta y nueve procedimientos, para el año 2008 se registra trescientos setenta y seis procedimientos, para el año 2009 se registra cuatrocientos dieciocho procedimientos, para el año 2010 se registra trescientos cincuenta y ocho procedimientos, para el año 2011 se registra quinientos once procedimientos, para el año 2012 se registra trescientos sesenta y tres procedimientos, que tuvieron lugar a partir del año 2013 con doscientos setenta y cuatro a procedimientos concluidos, en el año 2014 con doscientos sesenta y cuatro, en el año 2015 a doscientos cuarenta y nueve, en el año 2016 a doscientos noventa y uno, en el año 2017 a doscientos treinta y dos, en el año 2018 a cincuenta, en el año 2019 a cuarenta y dos, haciendo un total de mil cuatrocientos dos procedimientos concluidos entre el año 2012 al año 2019, ver gráfica N° 22.

Grafica N° 22



De esta manera al contrastar la cantidad total de procedimientos iniciados registrados en el año 2006 al año 2019, con cuatro mil doscientos sesenta, frente a la cantidad total de procedimientos concluidos en el año 2006 al año 2019, con un mil cuatrocientos dos, tenemos como resultado un treinta y tres por ciento de casos que fueron concluidos en los años del 2006 al 2019, ver gráfica N° 23.

Grafica N° 23



Ahora bien, durante los años 2006 al 2019 no se tiene información histórica sobre los Procedimientos Acelerado de Refinanciación Concursal –

PARC sino a partir del año 2020 mediante el Decreto Legislativo N° 1511 publicada el 11 de mayo del mismo año. Al no estar disponible la información de procedimientos estadísticos, se realizaron las consultas en la pagina https://servicio.indecopi.gob.pe/e-value/pgw_infoXParc.seam donde se recaudó la información necesaria para nuestro análisis.

Como primera apreciación notamos que existen quince registros para ser calificadas, ver imagen N° 01, sin embargo estas se deben analizar por tipo de solicitudes presentadas, cuantas solicitudes fueron admitidas y en que año dieron inicio a un Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal – PARC.

Imagen N° 01

INFORMACIÓN POR ENTIDAD CALIFICADA

Escoja el criterio de búsqueda, luego click en el botón BUSCAR

☐ Nro de Expediente

☐ Razón Social/Nombres y Apellidos

☒ Por año de presentación y Oficina Concursal

AQP-PARC

↓

2020

INDECOPI SEDE CENTRAL

↓

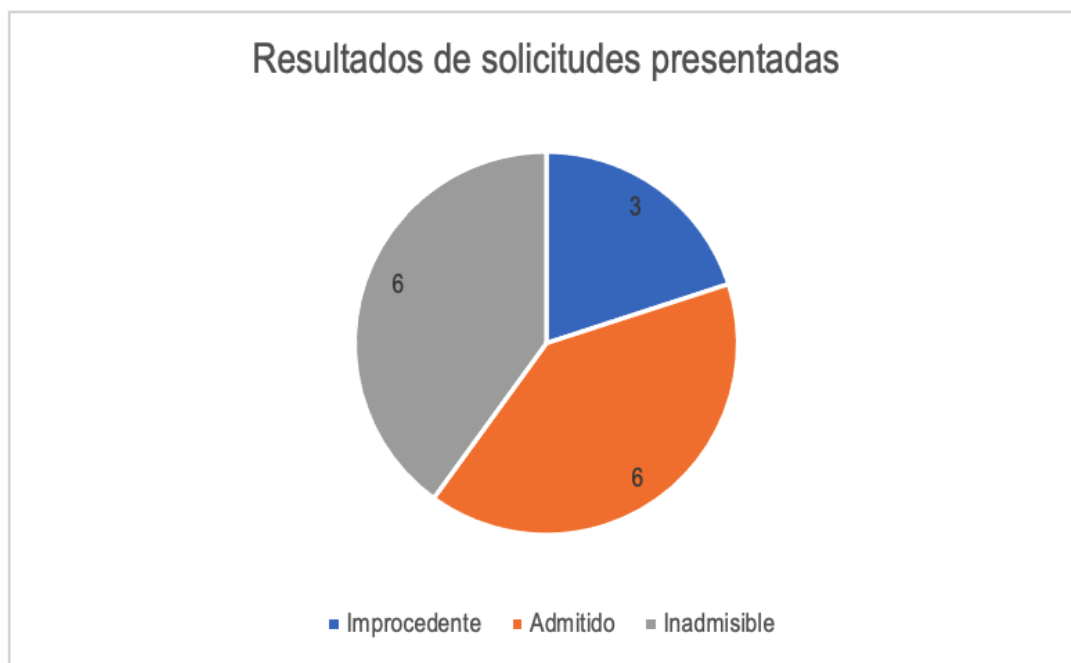
BUSCAR

Relación de entidades calificadas

N°	Entidad Calificada	N° Expediente	Lugar de Trámite	Tipo de Expediente	Estado	Nro Acreedores	Últ. Junta
1	AGROINDPEX S.A.C.	00001-2020/CCO-PARC	INDECOPI SEDE CENTRAL	PROCEDIMIENTO ACCELERADO DE REFINANCIACIÓN CONCURSAL - PAR	PRESENTADO	0	
2	CARRUSEL REPRESENTACIONES S.A.C.	00017-2020/CCO-PARC	INDECOPI SEDE CENTRAL	PROCEDIMIENTO ACCELERADO DE REFINANCIACIÓN CONCURSAL - PAR	PRESENTADO	53	
3	CORE ANDINA GROUP S.A.C.	00016-2020/CCO-PARC	INDECOPI SEDE CENTRAL	PROCEDIMIENTO ACCELERADO DE REFINANCIACIÓN CONCURSAL - PAR	PRESENTADO	4	
4	CORE ANDINA GROUP S.A.C.	00004-2020/CCO-PARC	INDECOPI SEDE CENTRAL	PROCEDIMIENTO ACCELERADO DE REFINANCIACIÓN CONCURSAL - PAR	PRESENTADO	0	
5	CORPORACION LOGISTICA MAQUINARIAS DEL PERU S.A.C.	00002-2020/CCO-PARC	INDECOPI SEDE CENTRAL	PROCEDIMIENTO ACCELERADO DE REFINANCIACIÓN CONCURSAL - PAR	PRESENTADO	11	
6	DELICORP HOLDING S.A.C.	00015-2020/CCO-PARC	INDECOPI SEDE CENTRAL	PROCEDIMIENTO ACCELERADO DE REFINANCIACIÓN CONCURSAL - PAR	PRESENTADO	7	
7	FULL OILS PETRO S.A.C.	00007-2020/CCO-PARC	INDECOPI SEDE CENTRAL	PROCEDIMIENTO ACCELERADO DE REFINANCIACIÓN CONCURSAL - PAR	PRESENTADO	0	
8	FULL OILS PETRO S.A.C.	00005-2020/CCO-PARC	INDECOPI SEDE CENTRAL	PROCEDIMIENTO ACCELERADO DE REFINANCIACIÓN CONCURSAL - PAR	PRESENTADO	0	
9	IMPORTACIONES A & V S.A.C.	00010-2020/CCO-PARC	INDECOPI SEDE CENTRAL	PROCEDIMIENTO ACCELERADO DE REFINANCIACIÓN CONCURSAL - PAR	PRESENTADO	4	
10	INVERSIONES ROMERO HNOS. S.R.L.	00013-2020/CCO-PARC	INDECOPI SEDE CENTRAL	PROCEDIMIENTO ACCELERADO DE REFINANCIACIÓN CONCURSAL - PAR	PRESENTADO	0	
11	MINERA MAPSA S.A.	00003-2020/CCO-PARC	INDECOPI SEDE CENTRAL	PROCEDIMIENTO ACCELERADO DE REFINANCIACIÓN CONCURSAL - PAR	PRESENTADO	0	
12	MINERA MAPSA S.A.	00011-2020/CCO-PARC	INDECOPI SEDE CENTRAL	PROCEDIMIENTO ACCELERADO DE REFINANCIACIÓN CONCURSAL - PAR	PRESENTADO	0	
13	MINERA MAPSA S.A.	00012-2020/CCO-PARC	INDECOPI SEDE CENTRAL	PROCEDIMIENTO ACCELERADO DE REFINANCIACIÓN CONCURSAL - PAR	PRESENTADO	0	
14	MINERA MAPSA S.A.	00006-2020/CCO-PARC	INDECOPI SEDE CENTRAL	PROCEDIMIENTO ACCELERADO DE REFINANCIACIÓN CONCURSAL - PAR	PRESENTADO	0	
15	REENCAUCHADORA Y VULCANIZADORA GIGANTE S.R.L.	00018-2020/CCO-PARC	INDECOPI SEDE CENTRAL	PROCEDIMIENTO ACCELERADO DE REFINANCIACIÓN CONCURSAL - PAR	PRESENTADO	5	

De las quince solicitudes presentadas, tres solicitudes resultaron en Improcedentes, seis solicitudes resultaron Admitidos y seis solicitudes resultaron Inadmisibles, ver gráfica N° 24.

Gráfica N° 24



De las seis solicitudes admitidas, tres fueron admitidas en el año 2020 y tres fueron admitidas en el año 2021, ver gráfica N° 25. Las tres entidades aceptadas en el año 2020 fueron Corporacion Logistica Maquinarias Del Perú S.A.C., Delcorp Holding S.A.C., Importaciones A & V S.A.C. y, las tres entidades aceptadas en el año 2021 fueron Carrusel Representaciones S.A.C., Core Andina Group S.A.C. y, Reencauchadora y Vulcanizadora Gigante S.R.L.

Gráfica N° 25



3. CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

Se emplea la metodología de investigación descriptiva para el desarrollo de la tesis. Se revisa el marco legislativo respecto al PARC e información pública proporcionada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi respecto a la Comisión de Procedimientos Concursales. También se procede a revisar bibliografías de autores nacionales e internacionales.

4. CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL NUEVO FAST TRACK Y PRE-PACK PARC 2.0

4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de la investigación realizada, y frente al poco éxito que tuvo el PARC en su modelo original, se asevera que el nuevo PARC 2.0 deberá de considerar los siguientes mejoras para que logre captar el interés de las personas naturales y jurídicas que actualmente se encuentran en crisis financiera como consecuencia de la Covid-19:

- Continuación del expediente virtual para agilizar el trámite del procedimiento y evitar contagios.
- Los efectos del concurso (suspensión de ejecuciones e inexigibilidad de obligaciones) deben ser automáticos contra la presentación de la solicitud de acogimiento al PARC 2.0, debiendo publicarse el acogimiento en el boletín concursal.
- Sanciones penales severas para los representantes del deudor en caso se acredite que de manera malintencionada buscaron defraudar el procedimiento.
- Reducción drástica de plazos para la instalación de la Junta de Acreedores y para la emisión de actos administrativos.
- Definir un procedimiento predictivo y vinculante donde los participantes (deudor y acreedores) tengan la posibilidad de estimar los resultados del mismo.
- El nuevo procedimiento debe de considerar tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas como entes facultados para el acogimiento. Para el caso de las personas jurídicas se deberá de concordar con lo dispuesto por el Artículo 2° de la Ley General del Sistema Concursal.
- La creación de 3 vías que permitan al deudor y a los acreedores pacificar la controversia. En ese sentido, el PARC 2.0 deberá considerar las siguientes posibilidades:
 1. Que el deudor y sus acreedores puedan solicitar la disolución y liquidación del deudor ante el Indecopi a través de un procedimiento distinto al de reestructuración, siempre bajo el paraguas del PARC 2.0.
 2. Que el deudor pueda solicitar el acogimiento al procedimiento de reestructuración PARC 2.0 cumpliendo con los requisitos que emanan de la norma.

3. Que tanto el deudor con sus acreedores puedan presentar un acuerdo previo (Pre-Pack) de refinanciación de obligaciones, bastando que el Indecopi apruebe el mismo para que surta efectos.
- Eliminación de barreras burocráticas que limitan la participación de los interesados de acuerdo con sus calificaciones crediticias.
 - Eliminación de la figura del Notario durante el desarrollo de la Junta de Acreedores. Para tales efectos, el Indecopi deberá facilitar un fedatario que de fe de los actos que se desarrollen durante la junta.
 - Presentación por parte del deudor de los archivos digitales que contengan sus estados financieros al cierre del 2020 y de un cierre mensual con una antigüedad no mayor a 2 meses.
 - No son sujetos de reconocimiento de créditos los acreedores laborales, previsionales y tributarios. Quedan sujetos a los acuerdos contenidos en el PRE en concordancia con su rango natural de prelación para el cobro. Dichos créditos deberán de ser declarados por el deudor al inicio del procedimiento.
 - Se debe de permitir la participación de los acreedores vinculados bajo la regulación prevista por la LGSC.
 - Por el mérito de la publicación del acogimiento en el boletín concursal se deberá declarar por concluido cualquier procedimiento iniciado a solicitud de un acreedor o más acreedores, con el objetivo de iniciar el concurso ordinario del deudor, siempre y cuando este último no haya sido difundido. Se deberá de considerar además que cualquier solicitud de inicio de procedimiento concursal ordinario o preventivo presentado con posterioridad será rechazada por la Comisión.
 - Únicamente deberán de contar con derecho de voto los acreedores reconocidos. Los demás acreedores se sujetan a lo acordado en el PRE.

- De acuerdo con la vía utilizada, la Junta de Acreedores únicamente deberá de aprobar o desaprobar el PRE, o en su caso, designar liquidador o aprobar el convenio de liquidación.
- La Junta de Acreedores solo contará con un plazo máximo de 15 días para prorrogar la toma de decisiones.
- El PRE debe considerar la totalidad de créditos reconocidos, declarados, contingentes y los que consten en los estados financieros del deudor.
- Frente a un incumplimiento el acreedor afectado deberá de poder solicitar la resolución del PRE.
- La resolución del PRE debe implicar que los créditos contenidos en este vuelven a ser exigibles. Por otro lado, los créditos declarados y reconocidos deberán de obtener la calidad de títulos ejecutivos para su posterior ejecución expedita en sede jurisdiccional.
- Para la disolución y liquidación del deudor deben ser aplicables las reglas del Capítulo VI del Título II de la LGSC.
- En caso de liquidación, los activos del deudor deben de ser realizados por el liquidador en el más breve plazo a través de las formas que la ley señala. En caso los activos se encuentren afectados con gravámenes se deberá de sacar a remate los mismos con las 2/3 partes del valor comercial que arroje la pericia que se practique por lo exteriores de los bienes. En caso nadie se adjudique el bien, este se podrá adjudicar por venta directa siempre que no exista lesión.
- El único recurso impugnatorio es el de apelación que es conocido por la Sala.
- Los acuerdos pueden ser impugnados y la impugnación es conocida por la Comisión. Para poder impugnar acuerdos se necesita que los acreedores interesados en hacerlo representen más del 10% del total de los créditos reconocidos. El deudor se encuentra facultado para impugnar. El impugnante debe de haber votado en contra del acuerdo.

- Indecopi debería tomar un rol más activo en la difusión del nuevo procedimiento que es mucho más ventajoso que el PCO y el PCP en cuanto a los plazos procedimentales.
- El hecho de que el deudor haya calificado al Programa Reactiva Perú (PRP) no implica que no pueda acogerse al PARC 2.0. Para dicho efecto, el deudor que haya recibido financiamiento del PRP deberá de acreditar en el procedimiento que los fondos fueron utilizados de acuerdo con lo previsto por la norma que regula el PRP.
- Los acreedores laborales, previsionales y tributarios deberán de contar con un paraguas que los proteja frente a un posible ejercicio abusivo del derecho por parte de los demás acreedores con mayor capacidad de decisión. En ese sentido, se recomienda que en caso los créditos laborales, previsionales y tributarios superen el 50% de la totalidad de la deuda reconocida, el plazo para estructurar el plan de pagos no podrá exceder de los 5 años para este tipo de créditos.
- De acuerdo con lo previsto por el Artículo 118.2 de la Ley General del Sistema Concursal, el Indecopi –en concordancia con lo indicado en el ítem anterior- deberá de realizar una labor aún más exhaustiva que la usual para evitar que un ejercicio abusivo del derecho termine perjudicando a cualquier otro acreedor; ello en virtud de la naturaleza especial del presente procedimiento concursal. En efecto, la posibilidad que tiene la Comisión de declarar de Oficio la nulidad del acuerdo adoptado en Junta permite – en cierta manera- que ello coadyuve a eliminar prontamente los riesgos propios de ese tipo de procedimiento Fast Track.

5. CAPÍTULO IV: ANEXOS

5.1. Detalle de Procedimientos Iniciados Del año 2006 al año 2019

Mes	Sede Central	Sede Lima Norte	ORI Arequipa	ORI Lambayeque	ORI La Libertad	ORI Cusco	ORI Loreto	ORI Piura	TOTAL
ene.-06	26								26
feb.-06	24								24

mar.-06	40								40
abr.-06	25								25
may.-06	28								28
jun.-06	48								48
jul.-06	25								25
ago.-06	40								40
sep.-06	55								55
oct.-06	44								44
nov.-06	36								36
dic.-06	50								50
ene.-07	19								19
feb.-07	42								42
mar.-07	42								42
abr.-07	45								45
may.-07	17								17
jun.-07	28								28
jul.-07	21								21
ago.-07	33								33
sep.-07	25								25
oct.-07	42								42
nov.-07	27								27
dic.-07	38								38
ene.-08	39								39
feb.-08	26								26
mar.-08	43								43
abr.-08	23								23
may.-08	20								20
jun.-08	43								43
jul.-08	26								26
ago.-08	28								28
sep.-08	33								33
oct.-08	41								41
nov.-08	24								24
dic.-08	30								30
ene.-09	37								37
feb.-09	31								31
mar.-09	39								39
abr.-09	27								27
may.-09	25								25

jun.-09	35								35
jul.-09	34								34
ago.-09	40								40
sep.-09	38								38
oct.-09	29								29
nov.-09	47								47
dic.-09	36								36
ene.-10	21								21
feb.-10	28								28
mar.-10	41	0							41
abr.-10	13	2							15
may.-10	24	2							26
jun.-10	32	0							32
jul.-10	21	0							21
ago.-10	17	17							34
sep.-10	24	18							42
oct.-10	22	11							33
nov.-10	34	6							40
dic.-10	17	8							25
ene.-11	28	1	4	1	0	0	1	1	36
feb.-11	19	7	0	1	0	1	0	2	30
mar.-11	32	7	2	0	2	0	0	0	43
abr.-11	4	4	1	0	1	0	2	1	13
may.-11	25	11	0	4	1	1	1	2	45
jun.-11	32	17	3	0	1	0	1	5	59
jul.-11	40	2	1	1	6	0	0	2	52
ago.-11	41	19	0	3	3	1	1	2	70
sep.-11	21	7	4	6	0	0	0	2	40
oct.-11	22	9	1	6	0	0	0	5	43
nov.-11	28	4	2	0	2	0	0	1	37
dic.-11	15	23	1	2	2	0	0	0	43
ene.-12	12	6	4	4	5	1	1	0	33
feb.-12	15	4	2	2	2	0	0	0	25
mar.-12	22	4	3	1	0	1	0	0	31
abr.-12	16	4	6	0	2	1	2	0	31
may.-12	13	2	1	7	3	0	1	1	28
jun.-12	21	1	4	1	1	0	1	0	29
jul.-12	21	5	1	8	1	0	0	0	36
ago.-12	10	3	4	5	3	1	0	0	26

sep.-12	13	6	2	1	1	0	0	0	23
oct.-12	17	11	0	3	0	0	3	0	34
nov.-12	23	12	0	0	0	2	0	0	37
dic.-12	18	7	4	0	0	0	1	0	30
ene.-13	25	7	0	0	0	0	1	0	33
feb.-13	4	13	0	0	0	0	1	0	18
mar.-13	19	10	5	0	0	0	1	0	35
abr.-13	17	6	3	0	0	1	0	0	27
may.-13	9	5	2	0	0	1	0	0	17
jun.-13	20	8	3	0	0	2	1	0	34
jul.-13	29	9	2	0	0	1	0	0	41
ago.-13	18	10	4	0	0	0	0	0	32
sep.-13	22	15	1	0	0	1	0	0	39
oct.-13	21	27	2	0	0	2	2	0	54
nov.-13	24	10	0	0	0	2	0	0	36
dic.-13	32	10	4	0	0	2	0	0	48
ene.-14	17	13	0	0	0	0	0	0	30
feb.-14	18	12	3	0	0	0	0	0	33
mar.-14	32	8	2	0	0	0	0	0	42
abr.-14	17	13	0	0	0	0	0	0	30
may.-14	14	5	4	0	0	0	5	0	28
jun.-14	12	23	0	0	0	2	1	0	38
jul.-14	15	27	3	0	0	2	2	0	49
ago.-14	9	9	6	0	0	0	2	0	26
sep.-14	16	24	7	0	0	2	0	0	49
oct.-14	7	9	4	0	0	0	0	0	20
nov.-14	20	15	1	0	0	4	0	0	40
dic.-14	12	20	4	0	0	2	0	0	38
ene.-15	14	6	3			1	0		24
feb.-15	17	8	2			1	0		28
mar.-15	6	1	1			4	0		12
abr.-15	8	10	6			0	2		26
may.-15	19	15	1			0	0		35
jun.-15	25	15	8			0	0		48
jul.-15	18	14	0			0	3		35
ago.-15	11	10	1			1	1		24
sep.-15	12	8	4			1	0		25
oct.-15	5	4	1			0	1		11
nov.-15	6	9	2			0	0		17

dic.-15	4	1	1			0	0		6
ene.-16	2	2	2			0	0		6
feb.-16	6	2	0			0	0		8
mar.-16	1	1	4			0	1		7
abr.-16	12	3	3			0	2		20
may.-16	6	2	2			3	0		13
jun.-16	1	11	1			0	0		13
jul.-16	3	2	2			0	0		7
ago.-16	5	5	0			0	0		10
sep.-16	10	3	0			0	0		13
oct.-16	3	3	0			0	0		6
nov.-16	6	1	2			0	2		11
dic.-16	1	1	0			0	0		2
ene.-17	1	1	0				0		2
feb.-17	2	2	4				1		9
mar.-17	2	0	2				0		4
abr.-17	3	0	1				0		4
may.-17	9	0	1				2		12
jun.-17	0	3	1				0		4
jul.-17	11	0	0				0		11
ago.-17	5	0	0				1		6
sep.-17	1	0	0				1		2
oct.-17	3	0	2				0		5
nov.-17	2	0	0				1		3
dic.-17	3	0	1				0		4
ene.-18	1		0			0	0		1
feb.-18	3		0			0	0		3
mar.-18	3		0			0	1		4
abr.-18	8		0			0	1		9
may.-18	1		0			0	0		1
jun.-18	8		1			2	5		16
jul.-18	6		0			0	0		6
ago.-18	5		0			0	0		5
sep.-18	0		1			0	2		3
oct.-18	4		0			0	0		4
nov.-18	1		1			0	0		2
dic.-18	3		0			0	0		3
ene.-19	1		0				0		1
feb.-19	6		1				1		8

mar.-19	3		0				0		3
abr.-19	7		0				0		7
may.-19	7		0				0		7
jun.-19	0		0				0		0
jul.-19	3		0				0		3
ago.-19	3		1				0		4
sep.-19	5		0				0		5
oct.-19	3		0				0		3
nov.-19	3		0				0		3
dic.-19	3		0				0		3
TOTALES	3175	691	173	56	36	46	59	24	4260

5.2. Detalle de Histórico de la Junta de Acreedores

Mes	TOTAL Juntas de Acreedores	Sede Central	Sede Lima Norte
ene.-06	3	3	
feb.-06	20	20	
mar.-06	8	8	
abr.-06	16	16	
may.-06	12	12	
jun.-06	15	15	
jul.-06	7	7	
ago.-06	22	22	
sep.-06	8	8	
oct.-06	9	9	
nov.-06	21	21	
dic.-06	10	10	
ene.-07	3	3	
feb.-07	24	24	
mar.-07	10	10	
abr.-07	19	19	
may.-07	31	31	
jun.-07	31	31	
jul.-07	19	19	
ago.-07	10	10	

sep.-07	13	13	
oct.-07	20	20	
nov.-07	12	12	
dic.-07	8	8	
ene.-08	1	1	
feb.-08	12	12	
mar.-08	6	6	
abr.-08	19	19	
may.-08	0		
jun.-08	18	18	
jul.-08	13	13	
ago.-08	1	1	
sep.-08	32	32	
oct.-08	12	12	
nov.-08	18	18	
dic.-08	3	3	
ene.-09	24	24	
feb.-09	11	11	
mar.-09	17	17	
abr.-09	10	10	
may.-09	12	12	
jun.-09	19	19	
jul.-09	12	12	
ago.-09	4	4	
sep.-09	2	2	
oct.-09	19	19	
nov.-09	4	4	
dic.-09	18	18	
ene.-10	15	15	
feb.-10	6	6	
mar.-10	2	2	
abr.-10	13	13	
may.-10	40	38	2
jun.-10	20	18	2
jul.-10	6	5	1
ago.-10	15	14	1
sep.-10	10	8	2
oct.-10	12	10	2
nov.-10	7	7	

dic.-10	5	2	3
ene.-11	12	12	0
feb.-11	5	4	1
mar.-11	4	1	3
abr.-11	13	10	3
may.-11	16	16	0
jun.-11	20	19	1
jul.-11	8	6	2
ago.-11	10	8	2
sep.-11	18	18	0
oct.-11	0	0	0
nov.-11	16	15	1
dic.-11	2	1	1
ene.-12	11	9	2
feb.-12	14	14	0
mar.-12	12	10	2
abr.-12	17	16	1
may.-12	10	10	0
jun.-12	14	14	0
jul.-12	14	14	0
ago.-12	9	9	0
sep.-12	9	9	0
oct.-12	4	4	0
nov.-12	13	13	0
dic.-12	4	4	0
ene.-13	11	11	0
feb.-13	8	8	0
mar.-13	3	3	0
abr.-13	12	12	0
may.-13	8	8	0
jun.-13	8	8	0
jul.-13	18	17	1
ago.-13	10	9	1
sep.-13	4	4	0
oct.-13	6	6	0
nov.-13	6	6	0
dic.-13	12	12	0
ene.-14	7	7	0
feb.-14	20	18	2

mar.-14	14	14	0
abr.-14	14	8	6
may.-14	29	27	2
jun.-14	27	15	12
jul.-14	1	1	0
ago.-14	26	23	3
sep.-14	19	8	11
oct.-14	10	5	5
nov.-14	14	12	2
dic.-14	7	7	0
ene.-15	2	2	0
feb.-15	17	16	1
mar.-15	14	3	11
abr.-15	19	8	11
may.-15	22	12	10
jun.-15	0	0	0
jul.-15	8	8	0
ago.-15	27	14	13
sep.-15	4	4	0
oct.-15	13	13	0
nov.-15	20	11	9
dic.-15	5	1	4
ene.-16	1	1	0
feb.-16	13	8	5
mar.-16	20	11	9
abr.-16	11	10	1
may.-16	1	1	0
jun.-16	7	7	0
jul.-16	2	2	0
ago.-16	7	1	6
sep.-16	3	3	0
oct.-16	2	1	1
nov.-16	7	7	0
dic.-16	6	6	0
ene.-17	1	1	
feb.-17	5	5	
mar.-17	2	2	
abr.-17	7	7	
may.-17	1	1	

jun.-17	0	0	
jul.-17	1	1	
ago.-17	5	5	
sep.-17	2	2	
oct.-17	0	0	
nov.-17	2	2	
dic.-17	0	0	
ene.-18	1	1	
feb.-18	1	1	
mar.-18	0	0	
abr.-18	2	2	
may.-18	5	5	
jun.-18	4	4	
jul.-18	0	0	
ago.-18	0	0	
sep.-18	0	0	
oct.-18	0	0	
nov.-18	1	1	
dic.-18	7	7	
ene.-19	4	4	
feb.-19	0	0	
mar.-19	2	2	
abr.-19	8	8	
may.-19	3	3	
jun.-19	0	0	
jul.-19	1	1	
ago.-19	1	1	
sep.-19	0	0	
oct.-19	1	1	
nov.-19	1	1	
dic.-19	0	0	
TOTAL	1,637	1,479	158

5.3. Detalle de Junta de Acreedores según destino del patrimonio del deudor

TOTAL

TOTAL		Disolución y liquidación 1/	Reestructuración 2/	Acuerdo Aprobado
2006	151	141	10	0
2007	200	196	4	0
2008	135	133	2	0
2009	152	145	7	0
2010	151	140	11	0
2011	124	119	5	0
2012	131	127	4	0
2013	106	103	3	0
2014	188	178	10	0
2015	151	148	3	0
2016	80	77	3	0
2017	26	23	2	1
2018	21	16	5	0
2019	21	15	5	1
TOTAL		1,637	74	2

SEDE CENTRAL			
	Disolución y liquidación 1/	Reestructuración 2/	Acuerdo Aprobado
2006	141	10	
2007	196	4	
2008	133	2	
2009	145	7	
2010	133	5	
2011	107	3	
2012	124	2	
2013	102	2	
2014	136	9	
2015	92	0	
2016	55	3	
2017	23	2	1
2018	16	5	
2019	15	5	1
TOTAL			
		1,418	59
			2

SEDE LIMA NORTE			
	Disolución y liquidación 1/	Reestructuración 2/	Acuerdo Aprobado
2006			
2007			
2008			
2009			
2010	7	6	
2011	12	2	
2012	3	2	
2013	1	1	
2014	42	1	
2015	56	3	
2016	22	0	
2017			
2018			
2019			
TOTAL	143	15	0

**5.4. Detalle de Créditos reconocidos según destino del patrimonio del deudor –
expresado en millones de soles**

Año	TOTAL			Sede Central			Sede Lima Norte	
	Disolución y liquidación 1/	Reestructuración 2/	Acuerdo Aprobado	Disolución y liquidación 1/	Reestructuración 2/	Acuerdo Aprobado	Disolución y liquidación 1/	Reestructuración 2/
ene.-06	10.69	0.00	0.00	10.69	0.00			
feb.-06	224.24	22.58	0.00	224.24	22.58			
mar.-06	5.17	48.50	0.00	5.17	48.50			
abr.-06	44.27	0.00	0.00	44.27	0.00			
may.-06	12.25	17.73	0.00	12.25	17.73			
jun.-06	122.44	13.78	0.00	122.44	13.78			
jul.-06	23.83	66.41	0.00	23.83	66.41			
ago.-06	27.69	0.65	0.00	27.69	0.65			
sep.-06	9.19	0.00	0.00	9.19	0.00			
oct.-06	43.85	0.00	0.00	43.85	0.00			
nov.-06	33.32	4.49	0.00	33.32	4.49			
dic.-06	13.88	0.00	0.00	13.88	0.00			
ene.-07	6.31	0.00	0.00	6.31	0.00			
feb.-07	34.14	0.09	0.00	34.14	0.09			
mar.-07	11.99	279.84	0.00	11.99	279.84			
abr.-07	19.22	0.00	0.00	19.22	0.00			
may.-07	46.55	0.00	0.00	46.55	0.00			
jun.-07	82.46	3.51	0.00	82.46	3.51			
jul.-07	44.96	0.00	0.00	44.96	0.00			
ago.-07	32.18	0.00	0.00	32.18	0.00			
sep.-07	294.18	0.00	0.00	294.18	0.00			
oct.-07	70.04	0.00	0.00	70.04	0.00			
nov.-07	53.36	4.58	0.00	53.36	4.58			
dic.-07	278.20	0.00	0.00	278.20	0.00			
ene.-08	51.94	0.00	0.00	51.94	0.00			
feb.-08	20.31	0.00	0.00	20.31	0.00			
mar.-08	7.12	0.00	0.00	7.12	0.00			
abr.-08	24.87	0.00	0.00	24.87	0.00			
may.-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
jun.-08	9.73	0.00	0.00	9.73	0.00			
jul.-08	18.49	0.00	0.00	18.49	0.00			

ago.-08	0.00	3.88	0.00	0.00	3.88			
sep.-08	98.37	0.00	0.00	98.37	0.00			
oct.-08	21.12	0.04	0.00	21.12	0.04			
nov.-08	10.28	0.00	0.00	10.28	0.00			
dic.-08	23.91	0.00	0.00	23.91	0.00			
ene.-09	97.03	1.55	0.00	97.03	1.55			
feb.-09	62.50	11.00	0.00	62.50	11.00			
mar.-09	133.51	0.22	0.00	133.51	0.22			
abr.-09	4.80	0.00	0.00	4.80	0.00			
may.-09	45.30	246.73	0.00	45.30	246.73			
jun.-09	42.29	39.59	0.00	42.29	39.59			
jul.-09	47.88	0.00	0.00	47.88	0.00			
ago.-09	0.80	1.46	0.00	0.80	1.46			
sep.-09	2.21	0.00	0.00	2.21	0.00			
oct.-09	47.72	0.00	0.00	47.72	0.00			
nov.-09	6.02	0.00	0.00	6.02	0.00			
dic.-09	10.15	27.69	0.00	10.15	27.69			
ene.-10	48.94	28.34	0.00	48.94	28.34			
feb.-10	12.57	0.00	0.00	12.57	0.00			
mar.-10	11.28	8.68	0.00	11.28	8.68		0.00	
abr.-10	73.54	0.32	0.00	71.74	0.32		1.80	
may.-10	116.23	0.00	0.00	108.63	0.00		7.60	
jun.-10	74.15	0.00	0.00	16.05	0.00		58.10	
jul.-10	6.92	0.00	0.00	5.72	0.00		1.20	
ago.-10	54.44	0.00	0.00	9.24	0.00		45.20	
sep.-10	36.56	1.37	0.00	8.86	1.37		27.70	
oct.-10	37.56	0.00	0.00	35.06	0.00		2.50	
nov.-10	28.06	0.00	0.00	21.96	0.00		6.10	
dic.-10	17.42	2.94	0.00	5.52	2.94		11.90	
ene.-11	6.58	0.00	0.00	6.58	0.00		0.00	0.00
feb.-11	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00		0.00	0.00
mar.-11	64.38	0.00	0.00	53.98	0.00		10.40	0.00
abr.-11	127.79	0.00	0.00	11.39	0.00		116.40	0.00
may.-11	12.18	169.63	0.00	12.18	169.63		0.00	0.00
jun.-11	181.14	0.00	0.00	177.54	0.00		3.60	0.00
jul.-11	9.42	0.00	0.00	6.92	0.00		2.50	0.00
ago.-11	22.54	22.60	0.00	20.94	0.00		1.60	22.60
sep.-11	22.48	0.00	0.00	22.48	0.00		0.00	0.00
oct.-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

nov.-11	17.41	4.86	0.00	10.31	4.86		7.10	0.00
dic.-11	2.87	9.40	0.00	2.87	0.00		0.00	9.40
ene.-12	46.76	1,189.20	0.00	45.78	1,189.20		0.98	0.00
feb.-12	15.46	0.00	0.00	15.46	0.00		0.00	0.00
mar.-12	21.30	0.00	0.00	5.68	0.00		15.62	0.00
abr.-12	1,389.23	0.00	0.00	1,379.96	0.00		9.27	0.00
may.-12	235.44	0.00	0.00	235.44	0.00		0.00	0.00
jun.-12	30.90	27.06	0.00	30.90	27.06		0.00	0.00
jul.-12	83.05	0.00	0.00	83.05	0.00		0.00	0.00
ago.-12	22.44	0.00	0.00	22.44	0.00		0.00	0.00
sep.-12	18.74	0.00	0.00	18.74	0.00		0.00	0.00
oct.-12	9.25	0.00	0.00	9.25	0.00		0.00	0.00
nov.-12	7.40	0.00	0.00	7.40	0.00		0.00	0.00
dic.-12	11.86	0.00	0.00	11.86	0.00		0.00	0.00
ene.-13	5.42	0.00	0.00	5.42	0.00		0.00	0.00
feb.-13	9.48	0.00	0.00	9.48	0.00		0.00	0.00
mar.-13	0.67	2.82	0.00	0.67	2.82		0.00	0.00
abr.-13	20.49	1,399.36	0.00	20.49	1,399.36		0.00	0.00
may.-13	63.23	0.00	0.00	63.23	0.00		0.00	0.00
jun.-13	17.74	0.00	0.00	17.74	0.00		0.00	0.00
jul.-13	97.85	0.00	0.00	96.63	0.00		1.22	0.00
ago.-13	13.91	2.71	0.00	13.91	0.00		0.00	2.71
sep.-13	121.02	0.00	0.00	121.02	0.00		0.00	0.00
oct.-13	4.43	0.00	0.00	4.43	0.00		0.00	0.00
nov.-13	15.01	0.00	0.00	15.01	0.00		0.00	0.00
dic.-13	446.03	0.00	0.00	446.03	0.00		0.00	0.00
ene.-14	18.67	18.79	0.00	18.67	18.79		0.00	0.00
feb.-14	52.48	19.20	0.00	51.72	1.53		0.76	17.67
mar.-14	31.68	18.11	0.00	31.68	18.11		0.00	
abr.-14	47.62	0.00	0.00	38.89	0.00		8.73	0.00
may.-14	119.74	0.29	0.00	119.71	0.29		0.03	0.00
jun.-14	11.21	9.57	0.00	8.70	9.57		2.51	0.00
jul.-14	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00		0.00	0.00
ago.-14	1,485.65	45.70	0.00	1,451.06	45.70		34.59	0.00
sep.-14	16.67	0.00	0.00	5.60	0.00		11.07	0.00
oct.-14	12.00	16.64	0.00	11.45	16.64		0.56	0.00
nov.-14	10.11	0.00	0.00	6.18	0.00		3.92	0.00
dic.-14	1.05	64.20	0.00	1.05	64.20		0.00	0.00
ene.-15	11.29	0.00	0.00	11.29	0.00		0.00	0.00

feb.-15	33.94	0.00	0.00	31.44	0.00		2.50	0.00
mar.-15	5.31	0.00	0.00	2.14	0.00		3.17	0.00
abr.-15	27.56	0.00	0.00	24.95	0.00		2.61	0.00
may.-15	200.42	102.19	0.00	197.96	0.00		2.46	102.19
jun.-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
jul.-15	9.73	0.00	0.00	9.73	0.00		0.00	0.00
ago.-15	24.46	11.94	0.00	15.82	0.00		8.65	11.94
sep.-15	19.62	0.00	0.00	19.62	0.00		0.00	0.00
oct.-15	16.12	0.00	0.00	16.12	0.00		0.00	0.00
nov.-15	61.38	0.00	0.00	60.66	0.00		0.72	0.00
dic.-15	0.61	0.00	0.00	0.16	0.00		0.45	0.00
ene.-16	47.81	0.00	0.00	47.81	0.00		0.00	0.00
feb.-16	11.09	0.00	0.00	3.42	0.00		7.67	0.00
mar.-16	772.10	0.00	0.00	766.74	0.00		5.37	0.00
abr.-16	475.46	0.00	0.00	467.91	0.00		7.55	0.00
may.-16	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00		0.00	0.00
jun.-16	2.45	0.00	0.00	2.45	0.00		0.00	0.00
jul.-16	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00		0.00	0.00
ago.-16	6.54	0.00	0.00	0.10	0.00		6.44	0.00
sep.-16	46.06	0.00	0.00	46.06	0.00		0.00	0.00
oct.-16	0.56	383.39	0.00	0.00	383.39		0.56	0.00
nov.-16	569.12	72.90	0.00	569.12	72.90		0.00	0.00
dic.-16	5.70	103.06	0.00	5.70	103.06		0.00	0.00
ene.-17	0.00	192.24	0.00	0.00	192.24	0.00		
feb.-17	565.67	0.00	0.00	565.67	0.00	0.00		
mar.-17	179.70	0.00	0.00	179.70	0.00	0.00		
abr.-17	140.14	0.00	0.00	140.14	0.00	0.00		
may.-17	115.48	0.00	0.00	115.48	0.00	0.00		
jun.-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
jul.-17	2.55	0.00	0.00	2.55	0.00	0.00		
ago.-17	8.86	0.00	4.41	8.86	0.00	4.41		
sep.-17	26.66	103.91	0.00	26.66	103.91	0.00		
oct.-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
nov.-17	42.35	0.00	0.00	42.35	0.00	0.00		
dic.-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ene.-18	0.00	23.66	0.00	0.00	23.66			
feb.-18	0.00	0.92	0.00	0.00	0.92			
mar.-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
abr.-18	1.42	1.23	0.00	1.42	1.23			

may.-18	47.70	0.00	0.00	47.70	0.00			
jun.-18	0.26	45.83	0.00	0.26	45.83			
jul.-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ago.-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
sep.-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
oct.-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
nov.-18	1.12	0.00	0.00	1.12	0.00			
dic.-18	22.82	47.50	0.00	22.82	47.50			
ene.-19	67.83	107.57	62.91	67.83	107.57	62.91		
feb.-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
mar.-19	0.34	8.95	0.00	0.34	8.95	0.00		
abr.-19	59.54	0.00	0.00	59.54	0.00	0.00		
may.-19	0.71	7.79	0.00	0.71	7.79	0.00		
jun.-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
jul.-19	9.29	0.00	0.00	9.29	0.00	0.00		
ago.-19	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00		
sep.-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
oct.-19	39.37	0.00	0.00	39.37	0.00	0.00		
nov.-19	0.00	10.42	0.00	0.00	10.42	0.00		
dic.-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	11,514.93	5,080.39	67.32	11,073.84	4,913.88	67.32	441.10	166.51

5.5. Detalle de procedimientos concluidos según tipo de solicitante

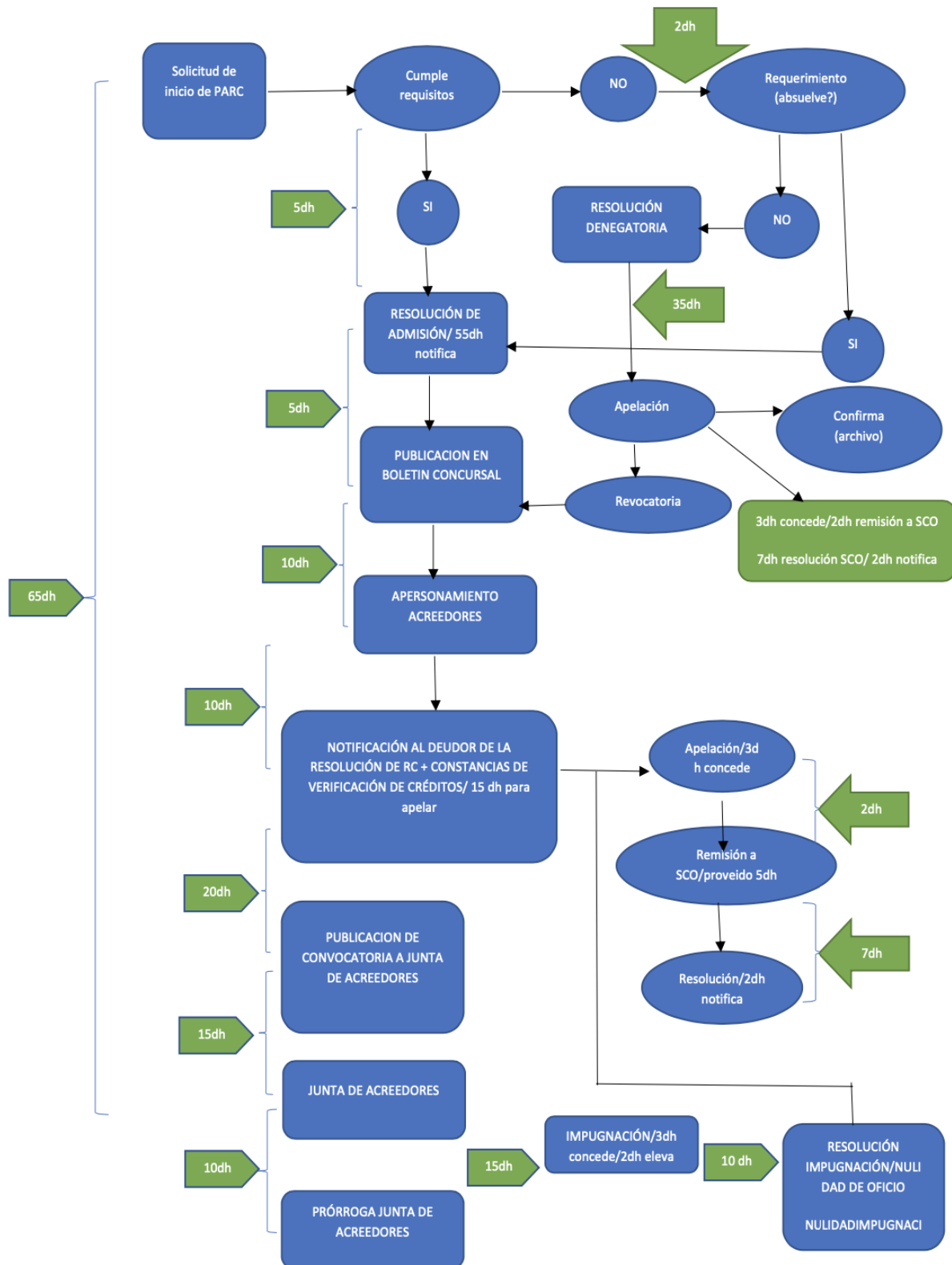
Año	TOTAL	SEDE CENTRAL			
		Acreedor 692-A y 703 1/	Deudor	Acreedor	Preventito
2006	0				
2007	0				
2008	0				
2009	0				
2010	0				
2011	0				
2012	0				
2013	274	260	9	5	
2014	264	210	35	19	
2015	249	185	38	26	
2016	291	195	49	47	
2017	232	133	61	36	2
2018	50	35	8	7	
2019	42	27	3	12	
TOTALES	1402	1045	203	152	2

**5.6. Detalle de solicitudes al Procedimiento Acelerado de Refinanciación
Concursal -PARC**

N°	Entidad Calificada	N° Expediente	Estado	Solicitud	Resuelto	Estado	Nro Acreedores
1	AGROINDPEX S.A.C.	00001-2020/CCO-PARC	PRESENTADO	7/07/20	13/07/20	Improcedente	0
2	CARRUSEL REPRESENTACIONES S.A.C.	00017-2020/CCO-PARC	PRESENTADO	30/12/20	8/01/21	Admitido	53
3	CORE ANDINA GROUP S.A.C.	00016-2020/CCO-PARC	PRESENTADO	30/12/20	8/01/21	Admitido	4
4	CORE ANDINA GROUP S.A.C.	00004-2020/CCO-PARC	PRESENTADO	29/09/20	5/10/20	Inadmisible	0
5	CORPORACION LOGISTICA MAQUINARIAS DEL PERU S.A.C.	00002-2020/CCO-PARC	PRESENTADO	14/08/20	21/08/20	Admitido	11
6	DELCORP HOLDING S.A.C.	00015-2020/CCO-PARC	PRESENTADO	16/12/20	23/12/20	Admitido	7
7	FULL OILS PETRO S.A.C.	00007-2020/CCO-PARC	PRESENTADO	16/10/20	23/10/20	Inadmisible	0
8	FULL OILS PETRO S.A.C.	00005-2020/CCO-PARC	PRESENTADO	30/09/20	7/10/20	Inadmisible	0
9	IMPORTACIONES A & V S.A.C.	00010-2020/CCO-PARC	PRESENTADO	4/11/20	11/11/20	Admitido	4
10	INVERSIONES ROMERO HNOS. S.R.L.	00013-2020/CCO-PARC	PRESENTADO	23/11/20	30/11/20	Inadmisible	0
11	MINERA MAPSA S.A.	00003-2020/CCO-PARC	PRESENTADO	9/09/20	16/09/20	Inadmisible	0
12	MINERA MAPSA S.A.	00011-2020/CCO-PARC	PRESENTADO	10/11/20	16/11/20	Improcedente	0
13	MINERA MAPSA S.A.	00012-2020/CCO-PARC	PRESENTADO	16/11/20	20/11/20	Improcedente	0
14	MINERA MAPSA S.A.	00006-2020/CCO-PARC	PRESENTADO	2/10/20	9/10/20	Inadmisible	0
15	REENCAUCHADORA Y VULCANIZADORA GIGANTE S.R.L.	00018-2020/CCO-PARC	PRESENTADO	30/12/20	8/01/21	Admitido	5

5.7. FLUJOGRAMA PARC

FLUJOGRAMA PARC (65 días hábiles + posible extensión de 39 días hábiles)



6. CAPÍTULO V: BIBLIOGRAFÍAS

1. FLORES POLO, Pedro. Derecho de Quiebra.- Lima. Marisol Perú Editores S.A. 1989 Segunda Edición Pág. 16-17.
2. 01-informe-tecnico-pbi-iv-trim-2020.pdf.-INEI
3. Decreto Ley 7439, Ley de Quiebras - Junta Nacional de Gobierno
4. Ley General del Sistema Concursal –Ley 27809
5. Xie, B. (25 de noviembre de 2016). Comparative Insolvency Law: The Pre-Pack Approach in Corporate Rescue. Cheltenham, Glasgow, United Kingdom: Edward Elgar Publishing.
6. Massel, M. J. (02 de octubre de 2013). Law 360. The Pros and Cons of Prepackaged Bankruptcy: <https://www.law360.com/articles/477393/the-pros-and-cons-of-prepackaged-bankruptcy>
7. Mastrovincenzo, M. (07 de julio de 2020). Abogados.com.ar. Una reforma legislativa innovadora en Colombia que abre camino a procesos de reestructuración abreviados en Latinoamérica: <https://abogados.com.ar/una-reforma-legislativa-innovadora-en-colombia-que-abre-camino-a-procesos-de-reestructuracion-abreviados-en-latinoamerica/26276>
8. De la Puente, C. y Barrón F. (2020). Artículo: El sistema concursal frente a la Covid-19: el caso peruano.
9. <https://lacamara.pe/carlos-aguirre-por-que-las-empresas-no-se-estan-acogiendo-al-parc/?print=print>
10. <https://semanaeconomica.com/economia-finanzas/macroeconomia/ejecutivo-incorporo-fast-track-para-la-segunda-fase-de-reactivacion> (04/06/2020)
11. <https://laley.pe/art/3031/los-diez-principios-juridicos-del-derecho-concursal-> (13/01/2016)
12. <https://www.ppulegal.com/covid/crisis-mas-de-50-empresas-han-ido-al-indecopi-por-procedimientos-concursales/> (18/08/2020)
13. <https://emprender.pe/indecopi-mas-de-50-empresas-sometidas-a-procedimientos-concursales/> (18/08/2020)
14. Indecopi (junio 2011) Compendio Estadístico Institucional 2006-2010
15. Indecopi (marzo 2012) Anuario de estadísticas institucionales 2011

16. Indecopi (abril 2013) Anuario de estadísticas institucionales 2012
17. Indecopi (abril 2014) Anuario de estadísticas institucionales 2013
18. Indecopi (mayo 2015) Anuario de estadísticas institucionales 2014
19. Indecopi (mayo 2016) Anuario de estadísticas institucionales 2015
20. Indecopi (mayo 2017) Anuario de estadísticas institucionales 2016
21. Indecopi (junio 2018) Anuario de estadísticas institucionales 2017
22. Indecopi (abril 2019) Anuario de estadísticas institucionales 2018
23. Indecopi (mayo 2020) Anuario de estadísticas institucionales 2019
24. <https://blogs.harvard.edu/bankruptcyroundtable/2020/04/28/pre-packaged-insolvency-in-india-lessons-from-usa-and-uk/> (28/04/2020)
25. <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/23150>
(<https://doi.org/10.18800/iusetveritas.202002.017>)
26. BCRP (2013) Algunas reflexiones sobre el Sistema de Insolvencia Empresarial en el Perú.
27. <https://laley.pe/art/9916/la-insolvencia-de-los-consumidores-en-tiempos-de-la-covid-19-por-que-estan-excluidos-del-regimen-consursal>
(09/07/2020)
28. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-20/peru-leads-regional-economic-crash-with-30-2-quarterly-drop> (20/08/2020)
29. <https://elcomercio.pe/economia/peru/procedimiento-acelerado-de-refinanciamiento-concursal-facilitan-que-empresas-refinancien-sus-deudas-para-evitar-la-quiebra-cuales-son-los-pasos-indecopi-covid-19-noticia/> (09/06/2020)
30. <https://elcomercio.pe/economia/opinion/procedimiento-concursal-refinanciones-aceleradas-para-todos-por-michelle-barclay-coronavirus-peru-indecopi-noticia/> (15/04/2020)
31. https://ar.lejister.com/articulos.php?Hash=e2151ef6870225bf94b1f0dda780f4be&hash_t=77cd5772f184e83d59c98b81b39f9004 (07/10/2019)
32. <https://cdsa.aacademica.org/000-010/807> (2013)
33. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-34372020000200459&script=sci_arttext&tlng=en (01/08/2020)
34. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122012000100009&lng=en&nrm=iso&tlng=en (2018)
35. <https://www.redalyc.org/pdf/825/82515354008.pdf> (2008)

36. https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2048/2019_Articulo_Cruz_Mojica_Olivia_Lilibeth.pdf?sequence=2&isAllowed=y
(26/06/2020)
37. Bankruptcy Act 1966 (16/04/2020)
38. <https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-uruguay.php?Id=18829>
(15/01/2021)